



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXVII - N° 735

Bogotá, D. C., jueves, 20 de septiembre de 2018

EDICIÓN DE 42 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariassenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 157 DE 2018 CÁMARA

por la cual deroga la Ley 22 de 1984 y expide la reglamentación del ejercicio de la Biología, de sus profesiones afines y de sus profesiones técnicas y tecnológicas, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DE LA PROFESIÓN DE BIOLOGÍA

Artículo 1°. *Concepto de biología.* Reconózcase la Biología como una profesión de Educación Superior, cuyo ejercicio en el país queda autorizado y amparado por la presente ley.

Se entiende por Biología una de las ramas de la ciencias que estudia la vida en todas sus manifestaciones, a los organismos, su estructura, función, comportamiento y sistemas funcionales, anatómicos y de información que los componen poblaciones, comunidades, ecosistemas; sus interacciones, relaciones, sus estructuras, funcionamiento, su comportamiento, su origen, su historia evolutiva, su variación y diversidad su naturaleza; esto también incluye las aplicaciones prácticas, técnicas, productivas, además de la historia y la epistemología del pensamiento biológico. Son profesiones afines a la biología, aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la biología en cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es derivado de la biología, tales como: microbiología, biología marina, biología ambiental, entre otras. Son carreras técnicas o

tecnológicas de la biología o derivadas a aquellas actividades que se ejercen en nivel medio y que están amparadas por un título académico en las modalidades educativas de formación técnica y tecnológica, conferidas por instituciones de educación superior legalmente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 2°. Áreas de trabajo de la biología. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la Profesión de Biología toda actividad relacionada con la utilización de los principios, conocimientos y técnicas propias de las diferentes áreas que conforman la Biología en actividades relacionadas con la dirección, administración, asesoramiento, evaluación y ejecución de acciones asociadas con la docencia, la investigación, el manejo, conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Solo podrán ejercer las anteriores actividades, así como la aplicación de estas en las áreas de: salud, educación, conservación, actividades agropecuarias, extractivas, industriales, comerciales y de servicio, entre otras, aquellos que acrediten ser biólogos.

TÍTULO II

EJERCICIO DE LA BIOLOGÍA Y DE SUS PROFESIONES RELACIONADAS Y/O DERIVADAS, Y DE SUS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS

Artículo 3°. *Requisitos para ejercer la profesión.* Para poder ejercer legalmente la Biología o sus profesiones relacionadas y/o derivadas, sus carreras técnicas y tecnológicas en el territorio nacional, se requiere estar inscrito en el Registro que llevará el Consejo Profesional de Biología, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado para tal fin.

Parágrafo. Quienes se anuncien como Biólogos o profesionales de carreras relacionadas y/o derivadas, y de sus carreras técnicas y tecnológicas deberán señalar el número de su matrícula profesional, so pena de incurrir en las sanciones que establezcan las disposiciones vigentes.

Artículo 4°. *Requisitos para obtener la matrícula y la tarjeta de matrícula profesional.* Sólo podrán ser matriculados en el Registro Profesional de Biólogos y obtener la matrícula y tarjeta profesional, para poder ejercer la profesión en el territorio nacional, quienes:

a) Hayan adquirido el título académico de Biólogo o sus profesiones relacionadas y/o derivadas, sus carreras técnicas y tecnológicas, otorgado por Instituciones de Educación Superior o técnicas y/o tecnológicas, oficialmente reconocidas, de acuerdo con las normas legales vigentes;

b) Hayan adquirido el título académico de Biólogo o de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, otorgado por Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos, situación que debe ser avalada por el organismo que se determine para tal efecto;

c) Hayan adquirido el título académico de Biólogo de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, otorgado por Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologación o convalidación del título académico ante las autoridades competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia.

Parágrafo 1°. Los títulos académicos de posgrado de los profesionales matriculados no serán susceptibles de inscripción en el registro profesional de Biología.

Parágrafo 2°. La información que los profesionales aporten como requisitos de su inscripción en el registro profesional respectivo, solamente podrá ser conocida por el Consejo Profesional de Biología para efectos del control y vigilancia del ejercicio profesional correspondiente, excepto cuando sea requerida por las demás autoridades de fiscalización y control para lo de su competencia o cuando medie orden judicial.

Artículo 5°. *Requisitos para obtener el certificado de inscripción para técnicos y tecnólogos.* Sólo podrán ser matriculados en el registro respectivo y obtener certificado de inscripción y su respectiva tarjeta, para poder ejercer las carreras técnicas y tecnológicas de la Biología en el territorio nacional, quienes:

a) Hayan adquirido el título académico en alguna de sus carreras técnicas y tecnológicas

de la Biología, otorgado por instituciones de Educación Superior oficialmente reconocidas, de acuerdo con las normas legales vigentes;

b) Hayan adquirido el título académico en alguna de las carreras técnicas y tecnológicas de la Biología, otorgado por instituciones de Educación Superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos;

c) Hayan adquirido el título académico en alguna de las carreras técnicas y tecnológicas de la Biología, otorgado por instituciones de Educación Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologación o convalidación del título académico ante las autoridades competentes, de acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 6°. *Procedimiento de inscripción y matrícula.* Para obtener la matrícula profesional o el certificado de que trata la presente ley, el interesado deberá presentar ante el Consejo Profesional de Biología, el título con su respectiva acta de grado, fotocopia del documento de identidad y el recibo de consignación de los derechos que para el efecto fije el Consejo Profesional de Biología conforme los medios y avances tecnológicos existentes y adoptados por el CPBIOL.

Verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo Profesional de Biología otorgará la matrícula o el certificado.

Parágrafo. Asígnesele al Consejo Profesional de Biología (CPBIOL), la función de inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la Biología, de sus profesiones relacionadas y o derivadas, y sus carreras técnicas y tecnológicas, ejercicio que en adelante se regirá por las disposiciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias y complementarias.

Cuando se haga alusión al ejercicio de la profesión de Biología, se entenderá incluido el ejercicio de las profesiones relacionadas y o derivadas, y sus carreras técnicas y tecnológicas de la Biología.

Artículo 7°. *Listado de graduados.* Para efectos de la inscripción o matrícula, toda Universidad o Institución de Educación Superior que otorgue títulos correspondientes a las profesiones y carreras aquí reglamentadas, deberá remitir de oficio o por requerimiento del Consejo Profesional de Biología, el listado de graduandos.

Artículo 8°. *Poseción en cargos, suscripción de contratos o realización de dictámenes técnicos que impliquen el ejercicio de la biología.* Para poder tomar posesión de un cargo público o privado, en cuyo desempeño se requiera el conocimiento o el ejercicio de la Biología o de alguna de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, sus carreras técnicas y tecnológicas; para participar en licitaciones públicas o privadas

cuyo objeto implique el ejercicio de la Biología; para suscribir contratos y para emitir dictámenes sobre aspectos técnicos de la Biología o de algunas de sus carreras técnicas y tecnológicas ante organismos estatales o personas de carácter privado, jurídicas o naturales; para presentarse o utilizar el título de Biólogo, para acceder a cargos o desempeños cuyo requisito sea poseer un título profesional, técnico o tecnólogo, se debe exigir la presentación, del documento que acredita la inscripción o el registro profesional de que trata la presente ley y el certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por el CPBiol.

Parágrafo 1°. Cuando se vincule por el Estado o la empresa privada, a personas jurídicas que vayan a desarrollar labores propias de la profesión de Biólogos, se anexará copia de las matrículas profesionales de los Biólogos o profesionales afines, técnicos o tecnólogos que formen parte de la sociedad.

Parágrafo 2°. Serán nulos los contratos o convenios celebrados con fundamento en los artículos precedentes, sin los requisitos allí establecidos. Para la declaratoria de nulidad de los contratos, convenios o demás actos a que se refiere el presente artículo, se seguirán los procedimientos establecidos en las normas aplicables para cada caso.

Parágrafo 3°. En todo caso el CPBiol desarrollará un instrumento informático que permita la consulta en línea y tiempo real de los biólogos, o sus profesiones relacionadas y/o derivadas, que indique los datos del profesional, tecnólogo o técnico, número de identificación, Universidad o Institución de Educación Superior donde obtuvo su título. Si la matrícula está en trámite, así deberá indicarse, y demás información relevante. Este instrumento se implementará seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 9°. *Dirección de labores de biología.* Cuando se trate de dirección de obras científicas, estudios o ensayos, el Director será un Biólogo, cuyo nombre y matrícula profesional deberá figurar en las respectivas obras, ensayos, estudios o memorias que se sacará a la terminación de la labor, sin perjuicio de lo establecido en normas legales vigentes.

Parágrafo. Cuando se trate de programas extranjeros en la dirección científica, participarán Biólogos o profesionales afines colombianos matriculados.

Artículo 10. *Propuestas y contratos.* Las propuestas que se formulen en procesos contractuales adelantados por entidades públicas del orden nacional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades de la Biología o de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, deberán estar avalados por profesionales inscritos en el

registro profesional de Biología, acreditados con la matrícula profesional.

Artículo 11. *Experiencia profesional. Técnica o tecnológica.* Para los efectos del ejercicio de la Biología o de alguna de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, y carreras técnicas y tecnológicas, la experiencia profesional, técnica o tecnológica se computará a partir de la terminación y aprobación del pènsun académico de educación superior. Sin embargo, para ejercer esta profesión se requiere de la matrícula profesional expedida por el CPBiol o de encontrarse en trámite y aportarse dentro de los términos legales establecidos para ello.

TÍTULO III

DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN

Artículo 12. *Ejercicio ilegal de la biología y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas y tecnológicas.* Ejerce ilegalmente la profesión de la Biología o de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas y tecnológicas la persona que sin cumplir los requisitos previstos en esta ley, practique o realice cualquier acto comprendido en el ejercicio de estas profesiones y/o carreras, por lo tanto incurrirá en las sanciones que establezca la autoridad penal o administrativa correspondiente. En igual infracción incurrirá la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, se anuncie o se presente como Biólogo o como Profesional o Técnico o Tecnólogo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 13. *Sanciones.* El particular o la entidad privada que viole las disposiciones de la presente ley incurrirá, sin perjuicio de las sanciones penales, en multa de dos (2) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Parágrafo. Las multas que se impongan como sanción por el incumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, deberán consignarse a favor del Consejo Profesional de Biología, serán impuestas por el Consejo Profesional de Biología.

Artículo 14. *Aviso del ejercicio ilegal de la biología.* El Consejo Profesional de Biología, cuando tenga conocimiento, deberá dar aviso a las personas naturales y jurídicas que están utilizando los servicios de Biólogos o profesionales relacionadas y/o derivados, técnicos o tecnólogos, que no cumplen con los requisitos para el ejercicio legal de la profesión.

Artículo 15. *Responsabilidad de las entidades públicas y privadas cuyo objeto comprende actividades inherentes a la biología.* La personas naturales o jurídicas, cuyas actividades comprendan, de forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan

al ejercicio de la Biología o de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas, en los aspectos relacionados con sus funciones, estarán obligadas a vincular como mínimo a un Biólogo o profesional relacionada y/o derivado, técnico o tecnólogo con matrícula y tarjeta profesional.

TÍTULO IV DE LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS

Artículo 16. *Participación de los profesionales extranjeros.* En las investigaciones, consultorías, estudios, proyectos, interventorías, asesorías y demás trabajos relacionados con el ejercicio de las profesiones a las que se refiere la presente ley, la participación de los profesionales extranjeros no podrá ser superior a un veinte por ciento (20%) de su personal de Biólogos o profesionales relacionadas y/o derivados, carreras técnicas o tecnológicos de la Biología frente al componente colombiano, sin perjuicio de la aplicación de las normas laborales vigentes, salvo que por razones eminentemente técnicas sea imposible disponer del personal nacional.

Parágrafo. Previa autorización del Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces, y tratándose de personal estrictamente técnico o científico indispensable, fuere necesaria una mayor participación de profesionales extranjeros que la establecida anteriormente, el patrono, la firma o la entidad que requiera tal labor, dispondrá de un (1) año contado a partir de la fecha de la iniciación de labores, para suministrar adecuada capacitación a los profesionales nacionales, con el fin de reemplazar a los extranjeros, hasta completar el mínimo de ochenta por ciento (80%) de nacionales.

Artículo 17. *Permiso temporal para ejercer sin matrícula a profesionales titulados y domiciliados en el exterior.* Quien ostente el título académico de Biólogo o profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas, esté domiciliado en el exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer temporalmente la profesión en el territorio nacional, deberá obtener del Consejo Profesional de Biología, un permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional con certificado de inscripción profesional, según el caso; el cual tendrá validez por un (1) año y podrá ser renovado por el Consejo Profesional de Biología, siempre, hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor contratada, previa presentación de solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa contratante o por el profesional interesado o su representante; título o diploma debidamente consularizado o apostillado, según el caso; fotocopia del contrato que motiva su actividad en el país y el recibo de consignación de los derechos respectivos.

Parágrafo 1°. La autoridad competente otorgará la visa respectiva, sin perjuicio del permiso temporal de que trata el presente artículo.

Parágrafo 2°. Se eximen de la obligación de tramitar el Permiso Temporal a que se refiere el presente artículo, los profesionales extranjeros invitados a dictar conferencias, seminarios, simposios, congresos, talleres de tipo técnico o científico, siempre y cuando no tengan carácter permanente.

Parágrafo 3°. Si el profesional beneficiario del permiso temporal pretende laborar de manera indefinida en el país, deberá homologar o convalidar el título de acuerdo con las normas que rigen la materia y tramitar la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional, según el caso.

TÍTULO V DEL CONSEJO PROFESIONAL DE BIOLOGÍA

Artículo 18. *Consejo Profesional de Biología.* El Consejo Profesional de Biología es un órgano sui generis de creación legal, de naturaleza pública, en el sentido de manejar y administrar recursos públicos y naturaleza privada en cuanto a su manejo administrativo se refiere, con personería jurídica y de conformación mixta que ejerce las funciones administrativas permanentes de inspección y vigilancia del ejercicio de la profesión de Biólogo. En adelante el Consejo Profesional se denominará Consejo Profesional de Biología y su sigla será "CPBiol", y tendrá su sede principal en Bogotá, D. C.

Artículo 19. *Miembros del Consejo Profesional de Biología.*

El Consejo Profesional de Biología estará integrado por los siguientes miembros con sus correspondientes suplentes excepto los representantes del gobierno:

- a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado;
- b) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado;
- c) Un (1) representante de las universidades oficiales reconocidas y aprobadas que otorguen el título de Biólogo, designado por acuerdo entre los rectores o sus delegados de esas instituciones;
- d) Un (1) representante de las universidades privadas reconocidas y aprobadas que otorguen el título de Biólogo, designado por acuerdo entre los rectores o los delegados de esas instituciones;
- e) Un (1) representante de las asociaciones de Biólogos existentes en el país y dotadas de personería jurídica, elegido por las juntas directivas de esas asociaciones;
- f) Un (1) representante de las asociaciones de las Profesiones relacionadas y/o derivadas de la Biología existentes en el país y dotadas

de personería jurídica, elegido por las juntas directivas de esas asociaciones;

g) Un (1) representante de las asociaciones de carreras técnicas y tecnológicas relacionadas y/o derivadas de la Biología existentes en el país y dotadas de personería jurídica, elegido por las juntas directivas de esas asociaciones

Parágrafo 1°. Con la excepción del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o sus delegados, los miembros del Consejo deberán ser Biólogos o profesionales relacionados y/o derivados, o carreras técnicas o tecnológicas titulados y matriculados.

Parágrafo 2°. El periodo de los miembros del Consejo Profesional de Biología, será de cuatro (4) años y podrán ser reelegidos una sola vez. Ningún miembro del Consejo podrá formar parte del mismo por más de ocho (8) años, así cambie de entidad a la que represente.

Artículo 20. *Funciones del Consejo Profesional de Biología (CPBIOL)*. El Consejo Profesional de Biología, CPBIOL, tendrá como funciones específicas las siguientes:

Dictar su propio reglamento interno. Para su validez, este reglamento requiere de la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente o el que cumpla sus funciones.

a) Expedir las tarjetas de matrícula y certificados de inscripción a los que lo soliciten y que cumplan todos los requisitos y llevar los registros correspondientes;

b) Fijar los derechos de expedición de la matrícula profesional, permisos, certificados y constancias y el modo de inversión de lo que por ese concepto se recaude;

c) Velar por el cumplimiento de esta ley y del Código de Ética Profesional con el objeto de mejorar y engrandecer la profesión de la Biología y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas;

d) Cancelar o suspender la matrícula profesional cuando se demuestre que fue otorgada a quien no llena los requisitos para obtenerla o a quien incurra en faltas contra la ética profesional, de acuerdo con la reglamentación que se expida;

e) Presentar al Ministerio de Educación Nacional, observaciones sobre la aprobación de los programas de estudios y establecimientos educativos relacionados con la Biología y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas;

f) Colaborar con las autoridades universitarias y profesionales en el estudio de los requerimientos académicos, conducentes a una óptima formación de los Biólogos y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas en Colombia;

g) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones al ejercicio legal de la Biología y de sus y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas y solicitar de aquellas la imposición de las sanciones correspondientes;

h) Implementar y mantener, dentro de las técnicas de la informática y la tecnología moderna, el registro profesional correspondiente a los profesionales de la Biología y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas;

i) Emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos relacionados con el ejercicio de la Biología y sus profesiones y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas cuando así se le solicite para cualquier efecto legal o profesional;

j) Servir de cuerpo consultivo oficial del Gobierno, en todos los asuntos inherentes a la reglamentación de la Biología y de sus profesiones afines, técnicas o tecnológicas;

k) Con el apoyo de las demás autoridades administrativas y de policía, inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales o jurídicas que ejerzan la Biología o alguna de sus profesiones y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas;

l) Crear, reestructurar o suprimir sus oficinas regionales, de acuerdo con las necesidades propias de la función de inspección, control y vigilancia del ejercicio profesional;

m) Atender las quejas o denuncias hechas sobre la conducta de los Biólogos y profesionales afines, técnicas o tecnológicas de la Biología, que violen los mandatos de la presente ley, del correcto ejercicio y del Código de Ética Profesional, absolviendo o sancionando, oportunamente, a los profesionales investigados;

n) Las demás que le señalen la ley, normas reglamentarias y complementarias.

Parágrafo 1°. Las determinaciones que tome el Consejo Profesional de Biología, en ejercicio de sus funciones, deberán ser motivadas, salvo las de mero trámite.

Parágrafo 2°. Contra esas determinaciones motivadas, procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo Consejo Profesional de Biología, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TÍTULO VI

CAPÍTULO I

Declaración de principios de los biólogos y sus profesiones relacionadas y/o derivadas y carreras técnicas y tecnológicas

Artículo 21. El Código de Ética Profesional del Biólogo Colombiano y de sus profesiones

relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas está basado en los principios de igualdad, debido proceso y mutuo respeto consagrados en la Declaración Universal de los Derechos humanos y la Constitución Política Colombiana. Constituye un conjunto de normas de conducta y principios éticos que aseguran una buena práctica de la profesión y permite el desarrollo de un espíritu de cooperación e intercambio científico-tecnológico en beneficio de la comunidad, y del mundo natural.

La profesión del Biólogo y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas está basada en el conocimiento científico y requiere, para un logro armonioso, una auténtica vocación centrada en la búsqueda de la verdad del hecho natural, y el mantenimiento inalterable de los valores que conforman el mundo científico: integridad, honestidad, imparcialidad y transparencia.

El carácter científico de la profesión y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas requiere que su desempeño profesional esté orientado a la solución de los problemas de su entorno, todas sus actividades deberán consagrar el respeto por la vida en todas sus formas y manifestaciones, y velará por la calidad del ambiente.

CAPÍTULO II

Obligaciones y deberes de los biólogos y sus profesiones relacionadas y/o derivadas carreras técnicas tecnológicas

Artículo 22. *Deberes generales de los profesionales, técnicos y tecnólogos relacionados y/o derivados.* El Biólogo deberá mantener un comportamiento personal de respeto consigo mismo y con sus conciudadanos, dando estricto cumplimiento a las normas consagradas en la Constitución y las leyes colombianas y deberá ejercer la profesión y las actividades que de ella se derivan con honestidad y excelencia para lo cual deberá:

a) Poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos en la protección de la vida, los seres vivos, los sistemas, el ambiente, el material genético, la diversidad, las comunidades y la etnodiversidad;

b) El Biólogo debe desarrollar sus actividades de investigación, producción y servicios, respetando las disposiciones de bioseguridad señaladas por las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales;

c) Todo Biólogo está en el deber de denunciar los procedimientos de investigación que atenten contra las normas de bioseguridad vigentes, debiendo poner en conocimiento cualquier irregularidad al Consejo Profesional de Biología y demás autoridades competentes;

d) El Biólogo aceptará únicamente los asuntos y cargos para los cuales tenga la capacidad

científica y técnica de atenderlos e indicará los alcances de su trabajo y limitaciones inherentes;

e) El Biólogo debe mantener un alto nivel de competencia, mostrarse receptivos a los cambios científicos y tecnológicos a través del tiempo;

f) Emitir los resultados de los estudios, conceptos, peritazgos que le sean encomendados conforme a la verdad y no condicionar su criterio profesional a razones diferentes a consideraciones técnicas y científicas;

g) Mantener la reserva sobre métodos, análisis y conceptos que le sean solicitados a los cuales tenga o haya tenido acceso y que puedan originar competencia desleal o fuga de información. Deberá guardar los secretos profesionales e industriales que en razón de su profesión y de su cargo tenga conocimiento;

h) El Biólogo debe buscar el equilibrio entre los distintos aspectos del desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, atendiendo a los derechos de las generaciones futuras;

i) Los biólogos que colaboren en el desarrollo o promoción de revistas o textos científicos, velarán porque las publicaciones alusivas a su profesión se presenten en forma profesional, científica, veraz y prudente;

j) Firmará con su nombre y número de matrícula profesional aquellos actos por los cuales sea enteramente responsable, y de cuya condición científica, técnica y ética puede dar razón completa;

k) Los demás deberes incluidos en todas las normas legales y técnicas relacionados con el ejercicio de la profesión de Biología.

Artículo 23. *Deberes para con el Consejo Profesional de Biología.* En relación con el Consejo Profesional, el Biólogo deberá:

a) Obtener la Matrícula Profesional que lo habilite para el ejercicio de la profesión, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Consejo Profesional de Biología;

b) Cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que formule u ordene el Consejo Profesional de Biología;

c) Registrar en el Consejo Profesional de Biología su dirección de correspondencia, dando aviso oportuno de cualquier cambio.

Artículo 24. *Deberes para con sus colegas.* En relación con sus colegas, el Biólogo deberá:

a) Abstenerse de suplantar a otro profesional, técnico y/o tecnólogo en sus investigaciones;

b) Dar crédito en trabajos, congresos, estudios y publicaciones, al aporte y a la autoría que corresponda;

c) Abstenerse de utilizar medios deshonestos para acceder a empleos o al desempeño de

funciones que estén siendo desarrollados por otro colega en detrimento de la lealtad profesional;

d) Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de algún colega, señalando errores profesionales en que presuntamente haya incurrido, a no ser que ello sea indispensable por razones ineludibles de interés general o, que se le haya dado anteriormente a dicho profesional la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas actuaciones y errores, haciendo caso omiso de ello;

e) El Biólogo debe mantener una relación de respeto y colaboración con sus colegas, asesores, colaboradores y otros, obrando con la mayor prudencia y diligencia cuando se emitan conceptos sobre las actuaciones de los demás profesionales, técnicos y/o tecnólogos;

f) Fijar para los colegas que actúen como colaboradores o empleados suyos, salarios, honorarios, retribuciones o compensaciones justas y adecuadas, acordes con la dignidad de las profesiones y la importancia de los servicios que prestan.

Artículo 25. *Deberes con la comunidad nacional e internacional.* El Biólogo deberá tener siempre presente que el ejercicio de la profesión constituye no solo una actividad técnica y científica sino que también tiene una función social, para lo cual deberá:

a) Respetar la dignidad humana y la vida en todos sus actos personales y profesionales;

b) Interesarse por el bien público, con el objeto de contribuir con sus conocimientos, capacidad y experiencia para servir a la humanidad;

c) Ser leal a su país y a los principios universales que garantizan los derechos humanos y, en consecuencia, no utilizará métodos que atenten contra la salud, la integridad y la vida de las personas;

d) Velará porque la integridad física e intelectual y la salud propia, de sus colaboradores y la de la comunidad en general sea garantizada, asegurándose siempre de controlar los efectos que todos los procesos puedan tener sobre ellas, supervisando continuamente las normas y leyes pertinentes, para hacerlas cumplir, para proponer nuevas o para adoptar las existentes a las condiciones en que se desempeña;

e) Propenderá por la difusión y el avance de la ciencia para beneficio de la sociedad;

f) Deberá respetar las normas sobre el medio ambiente y la seguridad y salubridad públicas y en consecuencia ejercerá la profesión teniendo siempre presente que todas sus acciones y omisiones tienen importantes efectos sobre el medio ambiente presente y futuro;

g) Deberá pronunciarse, denunciar y cuestionar las actividades que afecten el medio ambiente sano, incluyendo aquellas acciones y

omisiones que puedan dañar sistemas debido a la intervención gubernamental, pública o privada;

h) Tratará en todos los casos de comprender la relación entre su acción y el medio ambiente y procurará que su práctica conduzca a un manejo adecuado del ambiente y a su conservación en óptimas condiciones para las generaciones futuras;

i) Ejercerá la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a actividades partidistas;

j) Velará por la protección de la integridad del patrimonio nacional y la defensa de las áreas protegidas;

k) Tendrá en cuenta, en los proyectos que competen con su ejercicio profesional, los costos y beneficios no solo económicos sino sociales que de ellos se deriven.

Artículo 26. *Deberes con las instituciones o entidades.* El Biólogo deberá proceder con lealtad y honradez con las personas o entidades a las que preste sus servicios, para lo cual:

a) Considerará las diversas propuestas de una licitación o concurso con el mayor cuidado, siendo objetivo y teniendo siempre en cuenta el beneficio para su institución, además de las consecuencias sociales y ecológicas de su recomendación;

b) Valorará y respetará la calidad profesional de sus colegas y colaboradores;

c) Actuará de manera imparcial, cuando por las funciones de su cargo público o privado, sean responsables de fijar, preparar o evaluar pliegos de condiciones de licitaciones o concursos;

d) No prestará su hoja de vida para obtener la adjudicación de un contrato o cualquier negocio jurídico, que será desarrollado por otro profesional, tecnólogo o técnico.

CAPÍTULO III

Derechos de los biólogos

Artículo 27. *Derechos del biólogo.* Constituyen derechos irrenunciables de los profesionales, técnicos y/o tecnólogos con matrícula vigente:

a) Ocupar los cargos que requieran el ejercicio de la Biología en cualquier empresa, entidad o institución pública o privada, conforme lo establezca la presente ley y sus decretos reglamentarios;

b) Ejercer la dirección de los Laboratorios de las áreas de la Biología conforme el título requerido;

c) Recibir un pago justo y acorde con su formación intelectual y experiencia por sus servicios;

d) El Biólogo tiene derecho de propiedad intelectual sobre los trabajos de investigación, asesorías, adaptación, métodos, procesos o resultados analíticos que elabore con base en sus capacidades técnicas y sobre cualesquiera otros

documentos que reflejen su criterio o pensamiento científico;

e) A todos los derechos y prerrogativas laborales, administrativas, de contratación pública o privada, académicas y demás que se deriven del ejercicio de su profesión desde el momento mismo de la expedición de la matrícula profesional.

CAPÍTULO IV

Prohibiciones de los biólogos

Artículo 28. Incurrir en ejercicio ilegal la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, se anuncie o se presente como Biólogo y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y el profesión, el profesional de la Biología y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas que inscrito en el Renabiol, ejerza la profesión estando suspendida su matrícula profesional o certificado de inscripción profesional.

Artículo 29. *Prohibiciones generales de los profesionales de la biología y sus profesiones relacionadas y/o derivadas, técnicas y tecnológicas.* Son prohibiciones generales:

a) Permitir o facilitar el ejercicio ilegal de las profesionales de la biología reguladas por la presente ley;

b) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el desempeño de un cargo privado o público que requieran profesionales de la Biología y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas, en forma permanente o transitoria, a personas que ejerzan ilegalmente la profesión;

c) El préstamo de la firma o nombre profesional a terceros, sean estos Biólogos o no.

Artículo 30. *Prohibiciones para con el Consejo Profesional de Biología.* Son prohibiciones especiales para con el Consejo Profesional de Biología:

a) Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Consejo Profesional de Biología u obstaculizar su ejecución;

b) Aportar documentos que no correspondan a la realidad con el fin de obtener la Matrícula Profesional u otras certificaciones que expida el Consejo Profesional de Biología;

c) Expedir, permitir o contribuir para que se expidan títulos, diplomas, matrículas, tarjetas de matrícula profesional, certificaciones y permisos a personas que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios para ejercer la profesión.

Artículo 31. *Prohibiciones para con sus colegas.* Son prohibiciones especiales para con sus colegas:

a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes;

b) Firmar a título gratuito u oneroso, en documentación relacionada con el ejercicio profesional, que no hayan sido estudiados, controlados o ejecutados personalmente;

c) Difamar, denigrar o criticar injustamente a sus colegas, o contribuir en forma directa o indirecta a perjudicar su reputación o la de sus trabajos o negocios con motivo de su actuación profesional y/o usar métodos de competencia desleal con los colegas.

Artículo 32. *Prohibiciones para con las instituciones o entidades.* Son prohibiciones especiales con las Instituciones o Entidades:

a) Participar en licitaciones, concursar o suscribir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de la Biología, estando incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades que establece la Constitución y la ley o exista conflicto de interés;

b) Emitir conceptos sobre aprobación o rechazo de trabajos de investigación, cuando haya tenido o tenga intervención directa en ellos;

c) Ser proponente o contratista en proyectos cuando de alguna manera él pueda intervenir en la decisión sobre la asignación de estos contratos. Podrá darse excepción en estas condiciones cuando habiendo advertido explícitamente su vinculación con el trabajo o proyecto, esta haya sido considerada como no invalidante, sin perjuicio de las inhabilidades consagradas por la ley;

d) Recurrir a medios coercitivos o ilegales, gratificaciones o promesas de privilegios para influir en decisiones profesionales;

e) Ofrecer o recibir comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, sociedad, institución, etc., salvo autorización legal o contractual;

f) Participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales de colegas, con quienes se tuviese vinculación de parentesco, hasta el grado fijado por las normas de contratación.

CAPÍTULO V

De la responsabilidad de los profesionales de la biología, profesiones relacionadas y/o derivadas, tecnólogos, técnicos en la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y la bioética

Artículo 33. Se considera responsabilidad inaplazable e inherente al ejercicio de la Biología, propender, impulsar y apoyar todos los programas encaminados a la protección y conservación de los

recursos naturales, la biodiversidad y la bioética dentro de un manejo técnico y racional.

CAPÍTULO VI

De la investigación científica, publicación de trabajos y propiedad intelectual

Artículo 34. Los Biólogos dedicados a la investigación, son responsables de los temas de estudio del método y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y prevención para una correcta utilización.

Artículo 35. Los Biólogos que adelanten investigaciones de carácter científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio y obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan dar uso indebido a los hallazgos.

Artículo 36. Los trabajos de investigación podrán ser divulgados o publicados con la debida autorización de sus autores, ajustándose estrictamente a los hechos científicos debidamente comprobados.

Artículo 37. El Biólogo tiene derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o en equipo, de acuerdo con lo prescrito por las disposiciones sobre derechos de autor.

CAPÍTULO VII

De las inhabilidades de los profesionales de la biología, profesionales relacionadas y/o derivados, tecnólogos, técnicos

Artículo 38. *Régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio.* Incurrirán en faltas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades:

a) Los biólogos que actúen simultáneamente como representantes técnicos o asesores de más de una empresa que desarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin expreso consentimiento y autorización de las mismas para tal actuación;

b) Los profesionales que en ejercicio de sus actividades públicas o privadas hubiesen intervenido en determinado asunto, no podrán luego actuar o asesorar directa o indirectamente a la parte contraria en la misma cuestión;

c) Los profesionales no deben intervenir como peritos o actuar en cuestiones que comprendan las inhabilidades e incompatibilidades generales de ley.

TÍTULO VII

DE LAS FALTAS CONTRA LA ÉTICA Y SUS SANCIONES

CAPÍTULO I

De las faltas

Artículo 39. *Definición de falta disciplinaria.* Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del

procedimiento aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Código de Ética Profesional.

Artículo 40. *Previa definición de la falta y de la sanción disciplinaria.* Ninguno de los sometidos al régimen disciplinario podrá ser sancionado por un hecho que no haya sido definido previamente como falta disciplinaria, ni sometido a sanción de esta naturaleza que no haya sido establecida por disposición anterior a la comisión de la infracción que se sanciona.

Artículo 41. *Elementos de la falta disciplinaria.* La configuración de la falta disciplinaria deberá estar enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:

a) La conducta debe haber sido cometida por un profesional Biólogo, Tecnólogo, Técnico debidamente matriculado, o de alguna de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, debidamente certificado;

b) La conducta debe ser intencional o culposa;

c) La falta debe haber sido cometida en ejercicio de la profesión o de actividades relacionadas con esta;

d) La conducta debe ser violatoria de la Constitución Nacional, de la ley, de las normas reglamentarias de la profesión, de los deberes, prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades inherentes a la profesión de la Biología o de alguna de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas;

e) La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro de los postulados del artículo 29 de la Constitución Política y específicamente, del régimen disciplinario establecido en el presente Código.

Artículo 42. *Clasificación.* Las faltas contra la ética, el decoro y la disciplina del Biólogo se clasifican en: Faltas Graves y Faltas Leves.

Parágrafo 1°. *Faltas graves.* Son consideradas faltas graves y procederá como sanción la suspensión y cancelación de la Matrícula Profesional, las siguientes:

a) Falsedad en la documentación que presente para tramitar la matrícula profesional lo mismo que el empleo de recursos irregulares para el registro de títulos o para la obtención de la matrícula profesional de Biólogo y de sus profesiones relacionadas y/o derivadas, carreras técnicas o tecnológicas;

b) Incurrir en delitos cuyas víctimas sean sus clientes, colegas o empleadores y que se deriven del ejercicio de las actividades de la Biología;

c) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus colegas para participar en concursos,

licitaciones públicas o para suscribir contratación pública o privada;

d) Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o fraudulento provecho patrimonial en ejercicio de la profesión;

e) Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones disciplinarias que realice el Consejo.

También serán **faltas graves** y procederá como sanción la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta cinco (5) años:

a) El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la profesión;

b) Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro de la profesión;

c) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad del Biólogo;

d) El abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales;

e) El patrocinio, tolerancia o favorecimiento del ejercicio ilegal de la profesión.

Parágrafo 2°. *Faltas leves*. Son consideradas faltas leves y su sanción será la amonestación, la multa y la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por un (1) año, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la exlimitación de las funciones o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 88 de este código.

CAPÍTULO II

De las sanciones

Artículo 43. *De las sanciones*. Proceden las siguientes sanciones:

- a) Amonestación;
- b) Multa;
- c) Suspensión en el ejercicio de la profesión;
- d) Cancelación de la Matrícula Profesional.

Artículo 44. *Criterios para la imposición de sanciones*. Las sanciones a las faltas disciplinarias calificadas como leves y graves, se impondrán teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) Las modalidades o circunstancias del hecho se apreciarán de acuerdo con el grado de participación en la comisión de la infracción, la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes y el número de infracciones que se estén investigando;

b) Los motivos determinantes se apreciarán según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas;

c) Los antecedentes del infractor se apreciarán por sus condiciones personales y su previo ejercicio profesional.

Artículo 45. *Atenuantes*. Son circunstancias atenuantes las siguientes:

a) Haber observado buena conducta anterior;

b) Haber obrado por motivos nobles o altruistas;

c) Haber confesado voluntariamente la comisión de la falta;

d) Haber procurado evitar espontáneamente los efectos nocivos de la infracción, antes de iniciarse la acción disciplinaria;

e) Haber precedido inmediatamente a la infracción, provocación injusta y suficiente.

Artículo 46. *Agravantes*. Son circunstancias agravantes las siguientes:

a) Haber obrado por motivos innobles o fútiles;

b) La preparación ponderada de la falta;

c) Ejecutar la falta con insidias o artificios;

d) Hacer más nocivas las consecuencias de la falta;

e) Reincidir en la comisión de infracciones.

Artículo 47. *Concurso de faltas disciplinarias*. El profesional, técnico y/o tecnólogo que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética Profesional o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave.

Artículo 48. *Circunstancias que exoneran la responsabilidad*. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:

a) Se determine la existencia de fuerza mayor o caso fortuito;

b) Se obre bajo el estricto cumplimiento de un deber legal;

c) Se actúe en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

CAPÍTULO III

Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria

Artículo 49. *Caducidad de las faltas contra la ética*. La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, sin que se haya adoptado decisión de fondo en primera instancia. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

Artículo 50. *Prescripción de las sanciones disciplinarias*. La sanción disciplinaria prescribe

en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

TÍTULO VIII
DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
CAPÍTULO I

Del Tribunal Disciplinario

Artículo 51. *Tribunal Disciplinario.* El CPBiol, creará dentro del mismo: El Tribunal de Ética de la profesión, el cual estará conformado por tres (3) miembros los cuales serán propuestos por el representante de las Asociaciones, de las universidades públicas y de las universidades privadas, uno por cada uno de ellas y uno tercero de manera conjunta, en caso de no ponerse de acuerdo sobre el tercero, en un plazo de ocho (8) días, lo hará el Presidente del CPBiol, entre quienes se designará un ponente para adelantar e instruir la investigación disciplinaria.

Parágrafo 1°. El tribunal será citado por el Consejo Profesional de Biología, su elección se llevará a cabo en la reunión de conformación de Consejo y su vigencia será igual a la del Consejo y ejercerán sus cargos ad honórem.

Parágrafo 2°. Una vez constituido, el tribunal disciplinario elaborará su Reglamento Interno, con base en los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad, los designados deberán tener en cuenta y estarán sujetos el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés que establece el CPACA.

Artículo 52. *Aviso de la sanción.* Se informará de toda sanción disciplinaria al Consejo Profesional de Biología y se llevará registro de las mismas en los archivos del Consejo.

Artículo 53. *Costas.* El fallo por parte del Tribunal disciplinario, que resuelva la investigación que concluya con la responsabilidad sancionable para un Biólogo, determinará el valor de las costas procesales que sin perjuicio de la sanción impuesta, este deberá cancelar al Consejo por concepto de los gastos en los cuales se hubiesen incurrido en el curso de la investigación.

Artículo 54. *Apoyo Profesional.* El Consejo Profesional establecerá un área de apoyo jurídico para el Tribunal Disciplinario con persona natural o jurídica con el fin de asesorar e instruir la investigación disciplinaria.

CAPÍTULO II
De los principios rectores

Artículo 55. *Previa definición de la falta y de la sanción disciplinaria.* Ninguno de los sometidos al régimen disciplinario podrá ser sancionado por un hecho que no haya sido definido previamente como falta disciplinaria, ni sometido a sanción de esta naturaleza que no haya sido establecida por disposición anterior a la comisión de la infracción que se sanciona.

Artículo 56. *Derecho a la defensa y al debido proceso.* El procedimiento que deben adelantar

las autoridades disciplinarias, estará basado en el principio de defensa, de audiencia del acusado, favorabilidad y de contradicción de la prueba, ante la autoridad disciplinaria competente previamente establecida y observando a plenitud las formas propias del mismo.

Artículo 57. *Presunción de inocencia.* El profesional, técnico o tecnólogo a quien se atribuya falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante fallo ejecutoriado, igualmente toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado cuando no haya modo de eliminarla.

Artículo 58. *Cosa juzgada.* Ningún profesional, técnico o tecnólogo podrá ser investigado más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aun cuando esta tenga una nominación diferente.

Artículo 59. *Igualdad y proporcionalidad.* La norma disciplinaria se aplicará en virtud de los principios de igualdad, sin consideraciones diferentes a lo establecido en ella, y las sanciones que conlleve se impondrán proporcionalmente a la gravedad de la falta en que se incurra.

Artículo 60. *No agravación de la sanción.* Cuando se imponga sanción y se interponga el recurso de reposición por el disciplinado, no se podrá agravar la sanción impuesta.

Artículo 61. *Finalidad del procedimiento disciplinario.* En la interpretación de las normas del presente código, además de la prevalencia de los principios rectores, se deberá tener en cuenta que la finalidad del procedimiento es garantizar la ética con las garantías debidas a las personas.

Artículo 62. *Prevalencia de los principios rectores.* En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores que determinan este Código, los Códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo, todos conformes con la Constitución Política.

CAPÍTULO III
Notificaciones

Artículo 63. *Clasificación.* Las notificaciones deben realizarse personalmente o por aviso.

Parágrafo 1°. *Notificación personal.* Se notificarán personalmente por la Secretaría del Consejo el auto de apertura de diligencias previas, el auto de apertura de investigación formal, el pliego de cargos, el auto de archivo definitivo, el fallo de primera y segunda instancia, el acto que decide los recursos interpuestos, el auto que decide solicitudes de pruebas y de nulidad.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado y/o electrónico una citación a la dirección física y electrónica que aquel haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure

en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

Al hacer la notificación personal se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión. En el texto de la notificación se indicarán los recursos que proceden, la autoridad ante quien se interpone y los términos para hacerlo.

Parágrafo 2°. *Notificaciones por aviso.* Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del Registro de Inscripción Profesional, acompañado de copia íntegra del acto administrativo.

El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público del Consejo Profesional de Biología por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

Artículo 64. *Trámite.* La Secretaría del Consejo, notificará personalmente el pliego de cargos al profesional investigado y para ello se citará para que comparezca a la Secretaría del Consejo en los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibido de la comunicación, la que se hará por un medio idóneo a la dirección registrada en los archivos del Consejo.

Si el profesional no comparece en el término indicado para la notificación personal, se hará por aviso en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

Si transcurrido el término de la notificación por aviso, el inculpado no compareciere, se proveerá el nombramiento de un apoderado de oficio, con quien se surtirá la notificación y se continuará la actuación.

Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000. Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado.

CAPÍTULO IV

Recursos

Artículo 65. *Recursos.* Contra las providencias proferidas dentro del proceso disciplinario procede lo reposición (ante el tribunal), y en subsidio el de apelación (ante los consejeros).

Artículo 66. *Oportunidad para interponerlo.* El Recurso de Reposición deberá interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso.

Artículo 67. *Formalidades del recurso.* El Recurso de Reposición será presentado así:

- a) Por escrito y debidamente sustentado;
- b) Por el profesional afectado con la medida, o su defensor;
- c) Mediante el procedimiento y términos estipulados en el presente Código de Ética.

CAPÍTULO V

De las pruebas

Artículo 68. *Admisibilidad.* Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código General del Proceso. Los gastos que ocasione la práctica de la prueba serán de cargo de quien la solicita.

Artículo 69. *Necesidad de la prueba.* Toda providencia disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente allegadas y aportadas al proceso.

El fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca más allá de la duda razonable, sobre la falta y la responsabilidad del disciplinado.

CAPÍTULO VI

De la ineficacia de los actos procesales

Artículo 70. *Causales de nulidad.* Son causales de nulidad:

1. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
2. La violación del derecho a la defensa.

Artículo 71. *Declaratoria de oficio.* Cuando el Consejero o instructor advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.

Artículo 72. *Oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de instrucción.* Si es a solicitud de la parte interesada, la petición de nulidad se puede presentar en cualquier tiempo, antes del fallo definitivo.

Contra el auto que decide la solicitud de nulidad procede el recurso de reposición.

Artículo 73. *Solicitud.* El sujeto procesal que alegue una nulidad, deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá

formular nueva solicitud de nulidad, sino por causal diferente o por hechos posteriores.

Artículo 74. *Principios que orientan la declaratoria de las nulidades.*

a) No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa;

b) Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial, afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el proceso disciplinario;

c) No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica;

d) Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales;

e) Sólo puede decretarse, cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial;

f) No podrá declararse ninguna nulidad distinta a las señaladas en este código.

Artículo 75. *Término para resolver.* El investigador resolverá la solicitud de nulidad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

CAPÍTULO VII

De la revocatoria directa

Artículo 76. *Revocatoria directa.* Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;

b) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;

c) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Parágrafo. No procederá la revocatoria directa cuando el sujeto disciplinado haya impugnado mediante el correspondiente recurso de reposición o apelación, el fallo sancionatorio.

CAPÍTULO VIII

Impedimentos y recusaciones

Artículo 77. *Declaración de impedimentos.* El miembro del Tribunal de Ética como Autoridad Disciplinaria, deberá declararse impedido para conocer y decidir en las investigaciones disciplinarias, cuando concurra alguna de las causales de impedimento, tan pronto como se advierta.

Son causales de impedimento y recusación, para los miembros del Tribunal Ético de la profesión de Biología, las siguientes:

a) Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil;

b) Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia;

c) Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos procesales;

d) Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación;

e) Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales;

f) Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en cualquier tipo de sociedad, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil;

g) Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil;

h) Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales, de manera previa al hecho origen de la actuación disciplinaria;

i) Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil;

j) Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la demora sea debidamente justificada.

Por las mismas causales podrá ser recusado por cualquier sujeto procesal.

Artículo 78. *Procedimiento.* En caso de impedimento o recusación el miembro del tribunal en quien concurra la causal, pondrá en conocimiento del Consejo Profesional de Biología y él decidirá su procedencia. Si procede el impedimento o recusación y se declara, el Consejo se completará con su suplente o Consejero *ad hoc* nombrado por el respectivo Consejo.

CAPÍTULO IX

Sujetos procesales

Artículo 79. *Calidad de disciplinado.* La calidad de disciplinado o acusado se adquiere a partir de la notificación del Auto de Cargos. En la investigación preliminar tiene la calidad de imputado.

TÍTULO IX

DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I

Del procedimiento ordinario

Artículo 80. *Acceso al expediente.* El imputado o investigado tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente disciplinario a partir de la iniciación de la actuación disciplinaria.

Artículo 81. *Iniciación de la actuación disciplinaria.* La actuación disciplinaria se iniciará de oficio o por queja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la que deberá formularse por escrito o a través de un medio idóneo que garantice su autenticidad.

Parágrafo. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el Consejo Profesional de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna.

Artículo 82. *Ratificación de la queja.* Recibida la queja por la Secretaría del Consejo o quien esta delegue, procederá a ordenarse la ratificación de la queja. Si el querellante no comparece después de haber sido citado en dos ocasiones mediante un medio expedito del que se dejará constancia, se archivará la queja.

Para la ratificación de la queja, se debe tener en cuenta el contenido del artículo 25 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, que preceptúa: “En todas las actuaciones o trámites administrativos, suprimanse como requisito las declaraciones extrajudicial ante juez o autoridad de cualquier índole. Para estos efectos, bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento”.

Artículo 83. *Investigación preliminar.* Una vez ratificada la queja, será sometida a reparto entre los miembros del Tribunal para determinar el Investigador Ponente quien mediante auto, que no es objeto de recursos, ordenará la investigación preliminar, con el fin de establecer si hay o no mérito para abrir investigación formal disciplinaria contra el presunto o presuntos infractores.

Solo de manera excepcional se abrirá investigación preliminar de oficio cuando el quejoso no comparezca dada la gravedad de la infracción.

Artículo 84. *Término de la investigación preliminar.* La investigación preliminar no podrá

exceder de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del auto que ordena la apertura de la investigación preliminar, durante los cuales se decretarán y practicarán las pruebas que el investigador considere pertinentes o procedentes.

La Indagación Preliminar culminará con el Archivo Definitivo o Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria.

Artículo 85. *Fines de la indagación preliminar.* La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la falta disciplinaria, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, identificar e individualizar al profesional que presuntamente intervino en ella.

Podrá escuchar en versión libre y espontánea al profesional que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado.

Artículo 86. *Informe y calificación del mérito de la investigación.* Terminada la etapa de Indagación Preliminar, el Ponente procederá dentro del mes siguiente, a presentar el proyecto al tribunal, calificando la actuación y abriendo investigación formal u ordenando el archivo del expediente exonerando de responsabilidad al disciplinado, comunicando la decisión adoptada al quejoso y a los profesionales involucrados.

En la reunión del tribunal, los miembros determinarán si aprueban o modifican el proyecto presentado por el ponente.

El quórum para deliberar requerirá de la asistencia de dos de tres miembros quienes podrán decidir por mayoría.

Si el proyecto es aprobado, se adoptará la decisión propuesta mediante auto motivado. Si se debe modificar o rechazar, se presentará nuevamente a reparto el proyecto para su respectiva aprobación.

Los salvamentos de voto deberán constar en el acta de la reunión respectiva.

La providencia se notificará personalmente de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 87. *Archivo definitivo.* En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el profesional investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el Consejo Profesional, previo el proyecto entregado por el investigador del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.

Artículo 88. *Decisión de cargos.* El Consejo Profesional, formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Dicha decisión deberá contener:

- a) La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó;
- b) Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta;
- c) La identificación del profesional o autores de la falta;
- d) La función desempeñada por el profesional en la época de comisión de la conducta;
- e) El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados;
- f) La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta;
- g) La forma de culpabilidad;
- h) El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

Artículo 89. *Traslado del pliego de cargos.* Surtida la notificación, se dará traslado al profesional inculcado, o a su defensor, por el término improrrogable de diez (10) días hábiles, para presentar descargos, solicitar y aportar pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a su disposición en la Secretaría del Consejo.

Artículo 90. *Etapas probatorias.* Vencido el término de traslado el Consejero Investigador dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de los descargos, decretará las pruebas solicitadas por el investigado y las demás que considere conducentes y pertinentes, mediante auto contra el cual procede recurso de reposición en el evento de negativa de práctica de pruebas, el que deberá ser notificado personalmente al profesional disciplinado.

Las pruebas ordenadas se practicarán en un término no mayor de noventa (90) días. Las pruebas decretadas oportunamente dentro del término probatorio respectivo que no se hubieren practicado o aportado al proceso, se podrán evacuar en los siguientes casos:

- a) Cuando hubieran sido solicitadas por el investigado o su apoderado, sin que los mismos tuvieren culpa alguna en su demora y fuere posible su obtención;
- b) Cuando a juicio del investigador, constituyan elemento probatorio fundamental para la determinación de la responsabilidad del investigado o el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 91. *Alegatos de conclusión.* Surtida la etapa de pruebas y a partir del día siguiente a la constancia de la terminación del término

probatorio, se dará traslado al profesional inculcado o a su defensor, por el término improrrogable de cinco (5) días hábiles, para presentar alegatos de conclusión.

Artículo 92. *Fallo de primera instancia.* Vencido el término probatorio previsto y el de alegatos de conclusión, el Ponente, elaborará un proyecto de decisión, que se someterá a la consideración de los miembros del tribunal, los que podrán aceptarlo, aclararlo, modificarlo o rechazarlo.

El quórum para deliberar requerirá la asistencia de dos (2) integrantes del tribunal, quienes podrán decidir por mayoría absoluta.

Si el proyecto es aprobado, se adoptará la decisión propuesta mediante resolución motivada. Si se debe modificar o rechazar, se presentará nuevamente a reparto el proyecto para su respectiva aprobación.

Los salvamentos de voto deberán constar en el acta de la reunión respectiva y hacer parte del fallo.

Artículo 93. *Notificación del fallo.* La decisión adoptada por el Tribunal se notificará personalmente al interesado, y para ello se citará para que comparezca a la Secretaría del Consejo en los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibido de la comunicación, la que se hará por un medio idóneo a la dirección registrada en los archivos del Consejo.

Si el profesional no comparece en el término indicado para la notificación personal, se hará por aviso en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 94. *Recurso de reposición y subsidio de apelación.* Contra dicha providencia procede el recurso de reposición ante el Tribunal, y en subsidio el de apelación ante el Consejo Profesional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación personal o del aviso. Recurso que deberá sustentarse por escrito y con el lleno de los requisitos que exige el Código Contencioso Administrativo.

El Tribunal deberá decidir el recurso de reposición dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición en debida forma del recurso.

El Consejo Profesional tendrá un término máximo de treinta (30) días para dictar de plano el fallo de segunda instancia. Una vez proferida su decisión procederá a su notificación de acuerdo con los parámetros atrás indicados.

Artículo 95. *Ejecución de la sanción.* Las sanciones impuestas empezarán a ejecutarse a partir de la ejecutoria de los fallos proferidos una vez se encuentren en firme.

Parágrafo. *Aviso de la sanción.* De toda sanción disciplinaria, a través de la Secretaría del Consejo, se registrará en la carpeta del profesional debiendo el consejo ordenar las anotaciones en sus registros

y tomar las medidas pertinentes, con el fin de hacer efectiva la sanción.

CAPÍTULO II

Del procedimiento abreviado

Artículo 96. *Procedencia.* Cuando el profesional investigado acepte su responsabilidad y los cargos que se le ha formulado, se procederá a dictar el fallo.

Artículo 97. *Trámite y fallo.* De la solicitud de fallo anticipado conocerá el Tribunal, quien con ponencia del investigador procederá a presentar el proyecto de acuerdo con las formalidades previstas en el artículo 83 de este código, donde se tenga en cuenta para efecto de la dosificación de la pena que se disminuirá en una tercera parte del tiempo de suspensión y que si se trata de cancelación de la Matrícula Profesional, salvo por falsedad en los documentos, se impondrá suspensión por tres (3) años.

TÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 98. Establézcase el 17 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Biólogo.

Artículo 99. *Transitoriedad.* Quienes a la fecha de aprobación de la presente ley se desempeñen como Miembros del Consejo Profesional de Biología, se les ampliará su periodo hasta que se realice la elección de los miembros, para el caso que aplique; pero no más allá del término de dos (2) años, tiempo durante el cual se organizarán las Asociaciones de Profesiones derivadas y o relacionadas, así como de las carreras tecnológicas y/o técnicas, para lo cual el Consejo Profesional apoyará técnicamente la constitución y funcionamiento de las mismas.

Artículo 100. *Reglamentación.* El Gobierno nacional a partir de la promulgación de la presente ley, tendrá un término de seis (6) meses para reglamentar esta ley.

Artículo 101. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y publicación y deroga la Ley 22 de 1984 y demás disposiciones contrarias.

De los Honorables Congresistas:



PROYECTO DE LEY NÚMERO 157 DE 2018 CÁMARA

por la cual deroga la Ley 22 de 1984 y expide la reglamentación del ejercicio de la Biología, de sus profesiones afines y de sus profesiones técnicas y tecnológicas, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el nacimiento de la Ley 22 de 1984 y el surgimiento de la Carta Política del 1991, la Biología tomo relevancia para efectos de ser consagrada dicha profesión como sujeto de derechos, sirviendo de fundamento para la resolución de conflictos de la cotidianidad en los ámbitos aplicativos de su entorno, necesario para el andamiaje evolutivo no solo de los objetos investigados o desarrollados por la profesión sino además de la vinculación de situaciones que deben ir de la mano del cambio social y del hábitat en donde se desempeña cada profesional de la Biología. Es así como a la par de las necesidades ambientales, sociales y económicas del país, la biología se ha convertido en una herramienta sumamente importante para la sostenibilidad y el desarrollo de la sociedad y la Nación.

Por lo anterior es necesario que la Ley 22 de 1984, esencia jurídica del reconocimiento de la profesión de la Biología deba adoptar una transformación, que contenga nuevos elementos discursivos y técnicos con un objetivo claro, el cual debe ser el impulso de la profesión de la Biología en la misma ruta de la evolución social, jurídica, económica y política que tiene el país en todos sus ramas y componentes esenciales del crecimiento científico en todo el territorio nacional; por tal motivo mediante la presente exposición de motivos se desagregará las principales motivaciones para entender el objeto de la necesidad de entregar una mayor funcionalidad ética, técnica y jurídica.

ANTECEDENTES

En Colombia en el contexto de la Ley 22 de 1984, la Biología solamente se consideró como una rama científica sin ninguna connotación a escala profesional y jurídica que ameritará una intervención estatal, de la lectura del articulado se desprende una visión que para el momento histórico del país la Biología se vio crecer en un desierto de normas, proyectos de ley, tal vez con una visión futurista pero sin un sustento realista de diferentes áreas de trabajo intelectual y físico, es así como vemos el artículo 1° de la Ley 22 un sinnúmero de ramificaciones científicas consideradas frente al ordenamiento jurídico colombiano como elementos suficientes para iniciar un camino de importante sentido profesional para la Biología así:

“a) *Dirección y ejecución de la investigación científica, pura o aplicada, en los campos de la Biología Celular; Biología Molecular; Morfofisiología Vegetal y Animal; Biotecnología; Biofísica; Sistemática Vegetal y Animal; Genética; Microbiología; Ecología; Recursos Naturales Renovables; Recursos Hídricos; Flora; Fauna; Medio Ambiente; Control Biológico; Productos Naturales; Etología; Histología; Embrilogía; Utilización e Industrialización de Plantas y Animales; Tecnología de Recursos Alimenticios; Mejoramiento Genético; Nuevas*

Fuentes de Alimentos; Manejo de Recursos Agrosilviculturales; Cuencas Hidrográficas y Fenómenos de Impacto Ambiental; b) Aplicación técnica de los conocimientos y métodos de la Biología en los ensayos, análisis, control y tratamiento de los residuos industriales o domésticos; c) Dirección técnica y científica en laboratorios biológicos, jardines botánicos y zoológicos, institutos de ciencias naturales; estaciones biológicas experimentales; bioteros; zocriaderos; viveros; bancos de germoplasma; Instituto de Manejo de Recursos Naturales Renovables; museos de ciencias naturales; d) Estudio, planeación, proyección, especificación, dirección, fiscalización, contratación, inspección, supervigilancia, ejecución y evaluación de obras materiales que se rijan por la ciencia o técnica biológica en los campos especificados en el literal a); e) Dirección, supervisión y ejecución de labores cuyo resultado final sea un documento técnico o de carácter biológico; f) Ejecución en su propio nombre o en el de otros, de concesiones para la utilización de técnicas basadas en la aplicación de las áreas descritas en el literal a); g) Desempeño de cargos de consejeros y delegados en misiones y comisiones que se designen para representar el país en reuniones internacionales destinadas a estudiar, regular y dirigir las actividades científicas, industriales o técnicas relacionadas con la Biología; h) Desempeño de cargos, funciones o comisiones con la denominación de Biólogo en cualquiera de las ramas de la administración pública o privada; i) Asesoría y consultoría a las entidades oficiales y privadas vinculadas al nivel científico y tecnológico con recursos naturales y medio ambiente, en la inspección de calidad de los trabajos que les sean encargados, en los proyectos de investigación y otros proyectos de carácter técnico que desarrollen dentro del ámbito de la Biología; j) Participación en los peritazgos dentro de los procesos jurídicos y legales relativos a las áreas contempladas en el literal a)”.¹

Cimiento del respaldo científico desagregado por la Ley 22 de 1984, se había tomado como referente normativo el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, formalizado por el Decreto-ley 2811 de 1974, disposición proferida en marco de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno nacional por medio de la Ley 23 de 1973, la cual acogió las normas internacionales dadas por la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano en 1972¹. Trayectoria de la ley citada, la cual se tomó bajo el imperio de la Constitución de 1986, fundamento del artículo 76 de donde se desprendía la función normativa del Congreso, razón constitucional atendida por

el Ministerio para indicar que esta normativa ambiental, modificó sustancialmente la relación del hombre con la naturaleza al considerar el ambiente como un patrimonio común y un bien sujeto de protección y tutela jurídica².

Al llegar a este punto, con el nacimiento de la Constitución Política Nacional de 1991, desató una visión mucho más amplia en relación a lo que hasta ese momento se había desarrollado alrededor de los derechos relacionados con el medio ambiente y el ejercicio profesional de la Biología, mecanismos que entregan a la administración del estado una mayor amplitud de protección y como consecuencia de la misma la Jurisprudencia de la Corte Constitucional desata un sin número de sentencias de donde se toma un referente proteccionista sustentado en el mencionado Estado Social de Derecho esgrimido por la nueva Carta Política³.

También de la Constitución del 91, se tomaron las diferentes discusiones y teorías del contexto internacional en donde se clasificaron los derechos fundamentales en diferentes generaciones correspondiendo a los derechos colectivos del ambiente equipararse a los derechos constitucionales de tercera generación, creando un ambiente de importancia dentro de los juristas nacionales e internacionales, base de estas definiciones constitucionales no se contempla una puntualización de cada artículo del Capítulo Tercero de la Constitución, sin embargo, se ha mantenido la tendencia constitucionalista que los derechos de la tercera generación lo que buscan es desarrollar una tendencia jurídica por la inclusión de ciertas garantías del Estado Social de Derecho en una conexión mucho más fuerte con los Derechos Humanos reconocidos por la misma Carta Política, lo que desprende que el medio ambiente toma una connotación relevante protegida desde la punta normativa en cabeza de la Constitución Nacional, lo que genera una visión más verde en todo el contexto no solo del concepto de medio ambiente sino de todas sus variables en la cual interviene el ciudadano colombiano y en donde indudablemente en conjunto con el reconocimiento de la profesión de la Biología esta

² *Ibíd*em, pg. 6.

³ Constitución Política Nacional; artículos 79-80; **Artículo 79.** Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. **Artículo 80.** El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

¹ Decreto-ley 2811 de 1974, tomado de la compilación realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible en 2014, alojada en: <http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Decreto-Ley-2811-de-1974.pdf>

deba también de propender por el aseguramiento de los derechos constitucionales de la tercera generación.

En contexto de la Constitución Política de 1991, también se concibió el nacimiento de órganos con funciones administrativas, y con un objetivo fundamental el cual es la protección del medio ambiente constitucional, razón lógica para vincular científicos formados y diferenciados, en donde resalta las tareas científicas de los profesionales de la Biología, vemos entonces como el surgimiento de las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible, suponen el desarrollo de un proteccionismo del Estado colombiano derivado de la importancia del medio ambiente, definidas por el Ministerio de Ambiente así: “*Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), son entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar –dentro del área de su jurisdicción– el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país*”.

Sumergidos en este asunto las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible, también acogieron como es conocido un contexto regulatorio a partir de la Ley 99 de 1993, por el cual se da oficialmente la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictan otras disposiciones⁴. Y de lo que se refleja

4 FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA: Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales

de su lectura somera es la indudable necesidad de tener un equipo interdisciplinario que atiende el control del manejo del medio ambiente en todo el territorio nacional con científicos organizados de tal manera que fundamente a un más la función constitucional de protección de los derechos colectivos y del ambiente.

Con fundamento a lo anterior, se ha observado que muchas de estas funciones constitucionales y legales se han venido desarrollando en muchos casos por personal no capacitado para el reto previsto por la ley y la Carta Política que así los asiste para ejecutar las funciones, de otro lado, también con el cambio de situaciones nacionales e internacionales alrededor de este derecho se han venido vinculando una serie de situaciones como la expedición de licencias ambientales, el manejo del cambio climático y ahora las llamadas prácticas de fracking, que han aumentado en los últimos años, un mayor número de profesionales encargados de determinar cuál sería el actuar del estado, lo que lleva a la profesión de la Biología a estar en la vanguardia de las situaciones sociales, económicas, ambientales del país.

Al margen de las anteriores referencias normativas, es necesario que se desprenda una mayor intervención del estado en generar y capacitar desde el punto de vista normativo, intelectual y demás a los profesionales para el cumplimiento del objetivo constitucional de protección del medio ambiente, y es en ese punto en donde se busca que la Ley 22 de 1984, actualice y modifique muchas de las situaciones contempladas en el ejercicio de la Biología, en camino de atender la evolución no solo natural del medio ambiente sino las situaciones sociales,

renovables.

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo.
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental (SINA), cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil.
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.

económicas, culturales del estado colombiano para enfrentar los retos del Estado Social de Derecho Constitucional.

Destáquese por último que una vez puesta en marcha la Ley 22 de 1984⁵, se crea el Consejo Profesional de Biología, quien en la actualidad tiene como función principal el ejercicio de funciones de consultoría, control y reglamentación de la profesión de la Biología en todo el territorio nacional, fundamento de esto se ha venido exigiendo a los profesionales el trámite de la Tarjeta Profesional, además de estar inscritos en el Consejo, razón importante que en diferentes trámites con el sector público se reconozca como necesaria exigencia la presentación de dicho documento para efectos de acreditar aún más la profesionalidad de las personas que así la tramitan.

Cabe señalar que el Consejo Profesional de Biología, en la actualidad ha quedado sin herramientas de juicio para ejercer un mayor control en lo relacionado con la biología y actividades conexas con el ejercicio profesional de la Biología en todo el territorio nacional, obsérvese que dentro de los esquemas normativos de la Biología, y como ya se mencionó a los profesionales de la Biología además de solicitárseles la Tarjeta Profesional, también deben de presentar informes técnicos para la obtención de permisos para la ejercicio de otras actividades acompañadas de la profesión, caso puntual los requisitos de la Ley 13 de 1990, Estatuto Pesquero, y el Decreto número 1071 de 2015.

Dentro del ejemplo del Estatuto Pesquero, se hace hincapié en los requisitos para la obtención del permiso del ejercicio de la actividad pesquera la vinculación de conceptos de profesionales de la Biología, desarrollos científicos que en la actualidad no está regulado por la Ley 22 de 1984, y su Decreto Complementario, sirviendo de base y ejemplo a la necesidad de entregar una mayor amplitud de acción a la Ley 22 frente a otras estructuras administrativas, que en uso de sus facultades legales vinculan la función del profesional de la Biología como estandarte de sus procedimientos.

JURISPRUDENCIA NACIONAL

La Corte Constitucional en relación a la protección del medio ambiente como derecho, ha vinculado diferentes líneas discursivas para hacer amplitud a dicho concepto constitucional y dicha labor ha servido no solo al ciudadano a requerir una atención por parte del Estado, sino a mejorar cada vez más, las herramientas para los

profesionales alrededor de la citada protección constitucional, aún más a servido de apoyo para las diferentes entidades públicas para ejercer todo tipo de acciones en camino del medio ambiente, por tal razón la Corte ha indicado lo siguiente:

En Sentencia **T-095 de 2016** manifestó lo siguiente:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido que, en el marco del derecho a la vida –artículo 11 CP–, se infiere que el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre, pues sin este, la vida del ser humano perdería vigencia. Sin embargo, la jurisprudencia ha matizado su protección por vía de la acción de tutela a lo largo de los años, al existir, como se mencionó anteriormente, mecanismos judiciales eficaces e idóneos para su protección y dificultades en la determinación de un derecho subjetivo.” En otro apartado de la misma afina el concepto de Constitución Ecológica así: *“La Corte ha precisado que la Constitución ecológica tiene una triple dimensión, por un lado, el deber de protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico, siendo obligación del Estado, proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, existe un derecho de todos los individuos a gozar de un medio ambiente sano, el cual es exigible por medio de diferentes acciones judiciales –civiles, penales, populares–. A su vez, existen un conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares para el resguardo del medio ambiente, derivadas de disposiciones de la constitución ecológica”⁶.*

⁶ Sentencia T-622 de 2016: 5.3. La Carta Política de 1991, en sintonía con las principales preocupaciones internacionales en materia de protección del ambiente y la biodiversidad, ha reconocido que el derecho fundamental al medio ambiente sano tiene el carácter de *interés superior*, y de esta forma, lo ha desarrollado ampliamente a través de un importante catálogo de disposiciones –cerca de 30 en total– que consagran una serie de principios, mandatos y obligaciones enfocados en una doble dimensión dirigida a: (i) proteger de forma integral el medio ambiente y (ii) garantizar un modelo de desarrollo sostenible, sobre los que se ha edificado el concepto de *“Constitución Ecológica”*.

Ahora bien, el concepto de *Constitución Ecológica* recoge algunos de los más importantes desarrollos legales para la protección del medio ambiente que se han dado en el marco del derecho internacional en las últimas décadas, principalmente, desde que se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo (1972). A partir de ese momento, el influjo que el derecho internacional ha tenido sobre las constituciones nacionales en materia medio ambiental es patente y se ha concretado, según recientes estimaciones, en el reconocimiento expreso del derecho a un ambiente sano por parte de 76 naciones, y su consagración constitucional en al menos 120 constituciones en las que se protege un amplio rango de factores que componen la naturaleza y la biodiversidad como el agua, el aire, la tierra, la fauna, la flora, los ecosistemas, el suelo, el subsuelo y la energía, entre otros.

Así las cosas, en nuestro constitucionalismo –que sigue las

⁵ **Artículo 3º.** Para ejercer dentro del territorio nacional la profesión de Biólogo se requiere la correspondiente matrícula expedida por el Consejo Profesional de Biología que se crea con la presente ley.

Artículo 4º. Para la expedición de la matrícula profesional de Biólogo se requiere acreditar el respectivo título, o uno equivalente, conferido por una institución de Educación Superior reconocida y autorizada por el Estado y registrado conforme a lo dispuesto por el Decreto número 2725 de 1980.

En cuanto al principio de prevención en materia ambiental la Corte manifiesta en la Sentencia **T-622 de 2016**: “Este principio busca que las acciones de los Estados se dirijan a evitar o minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas –regulatorias, administrativas o de otro tipo– que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se produzca o se agrave.” Relacionado con el principio precautorio en materia ambiental también indica: “El principio de precaución se erige como una herramienta jurídica de gran importancia, en tanto responde a la incertidumbre técnica y científica que muchas veces se cierne sobre las cuestiones ambientales, por la inconmensurabilidad de algunos factores contaminantes, por la falta de sistemas adecuados de medición o por el desvanecimiento del daño en el tiempo. No obstante, partiendo de que ciertas afectaciones resultan irreversibles, este principio señala un derrotero de acción que “no sólo atiende en su ejercicio a las consecuencias de los actos, sino que principalmente exige una postura activa de anticipación, con un objetivo de previsión de la futura situación medioambiental a efectos de optimizar el entorno de vida natural”

Otro de los ejemplos desagregados por la Corte en materia del medio ambiente también concentra la Sentencia **C-666 de 2010**, relacionada con los animales silvestres usados para fines prohibidos así: “el medio ambiente. La ley demandada persigue una protección adicional de los animales en aras de evitar que realicen labores que no son acordes con su naturaleza y cuyo hábitat es completamente diferente al encierro de los circos. Los trabajadores de los circos pueden seguir laborando. La fauna silvestre no es propiedad privada sino del Estado, parte del medio ambiente y tiene una protección especial. Colige que el interés de un grupo particular no puede nunca anteponerse al bien común, de lo contrario se desconocerían los principios de solidaridad y de prevalencia del interés general. Enfatiza que sobre los animales no se puede edificar derechos adquiridos y una vez salgan del cautiverio el Estado ha de definir tenerlos como fauna silvestre.” Cita relacionada con la Sentencia **C-283 de 2014**⁷.

tendencias globales en la materia-, el medio ambiente y la biodiversidad han adquirido progresivamente valiosas connotaciones

socio-jurídicas. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil: la evolución conceptual del derecho a la par del reconocimiento de la importancia de la “madre tierra” y sus múltiples componentes frente a la estrategia del desarrollo sostenible han sido producto de un proceso complejo y difícil que aún genera controversia al intentar conciliar a un mismo tiempo tres elementos: el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente en el entendido que esta conjugación permita la posibilidad de aprovechamiento sostenible de los recursos en el presente y en el futuro.

⁷ De tal manera que la Corte halla fundamento constitucio-

Sirve lo anterior de base para indicar que la Corte Constitucional cada vez ha ampliado los criterios proteccionistas del medio ambiente como derecho, asunto que debe tenerse en cuenta por el legislativo para realizar una amplitud de coordenadas para todas las profesiones alrededor de los temas de la protección y conservación del medio ambiente, sin embargo a lo que atañe, es para simbolizar la importancia que le ha dado la Corte a diferentes temas del contexto nacional para ejercer una protección extensiva de derechos, y que en cada situación a resolver se requiere de profesionales capacitados que puedan atender las necesidades de las entidades públicas en búsqueda de una protección del medio ambiente.

DE LAS NUEVAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Licencias ambientales: Con fundamento de la evolución de la sociedad, frente al manejo ambiental, se ha visto enfrentado el profesional de la Biología a determinar ciertos criterios para el uso del suelo, razón por la cual se desata las funciones de otro tipo de entidades como es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país, sustento misional en donde se requiere un sin número de profesionales de la Biología para establecer el cumplimiento normativo de los proyectos que tengan alguna injerencia en el manejo ambiental del país⁸.

nal en la determinación del Congreso al prohibir los animales silvestres en espectáculos circenses. La protección de los animales desde la perspectiva de los deberes morales y solidarios –bienestar animal–, como del comportamiento digno que los humanos están obligados a proveer respecto de otras especies –seres vivos y sintientes– en aras de la *conservación del medio ambiente* (C-666 de 2010), es suficiente para que este Tribunal respalde la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 1638 de 2013 por resultar conforme a los artículos 8°, 79 y 95, entre otros, de la Constitución.

⁸ Tomado de la Red por la justicia ambiental en Colombia, Resumen del Decreto 2041 de 2014, norma que complementa la Ley 99 de 1993: Este Decreto se expidió teniendo en cuenta la obligatoriedad de la **licencia ambiental** para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Así mismo, el **objetivo** de este decreto es fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental en aras de la protección del medio ambiente. De igual forma, se explica quiénes son las **autoridades ambientales competentes** para otorgar o negar licencias ambientales. Estas son: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las de Desarrollo Sostenible: Los municipios, distritos y áreas metropolitanas con una población superior a un millón de personas. Se explica también, qué es una licencia ambiental, que se define como una autorización otorgada

Fracking: Tema álgido de la actualidad nacional y ruta de explotación del suelo para la búsqueda de hidrocarburos en lo que se denomina como la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales, recabando y generando el fracturamiento hidráulico en la roca que los produce, concepto íntimamente técnico del cual se desprende todo tipo de conceptos que los profesionales de la Biología deben atender en la actualidad del país, y objeto que debe tener todas las herramientas profesionales por medio de la ley que las acoge como camino intelectual y científico.

Tratados Internacionales de protección y relevancia ambiental para la profesión de la Biología en el país:⁹

TRATADO / CONVENIO / LEY	ASUNTO	FECHA
DECLARACIÓN DE BARILOCHE	Declaración del Segundo Congreso Latinoamericano de Parques y otras Áreas Protegidas.	Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2007.
LEY 74 DE 1979	Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978.	Diciembre 28 de 1979.
LEY 464 DE 1998	Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”.	Agosto 4 de 1998.
CONVENIO CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.	Enero 3 de 1973.
DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO	Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.	Junio 16 de 1972.
DECLARACIÓN DE RÍO	Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.	14 de junio de 1992.
PROTOCOLO DE KIOTO	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático	27 de agosto de 1998.
LEY 807 DE 2003	Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada.	27 de mayo de 2003.
POLÍTICA NACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD	Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (Ley 165 de 1994).	1992.
CONVENIO RAMSAR	Convenio sobre Humedales (Ley 357 de 1997).	1971.

Dentro de contexto internacional se ha visto con alta preocupación el acogimiento de diferentes

tratados y convenios de donde se ha desprendido la necesidad estatal por vincular esquemas normativos que ayuden a contextualizar las problemáticas ambientales de cada país, razón por la cual Colombia no se ha hecho esperar en enlazar más y más asuntos relacionados con el ejercicio de la Biología a la protección del medio ambiente y el uso adecuado de los entornos protegidos.

El río Atrato como sujeto de Derechos: La Corte Constitucional acogiendo la **Sentencia T-622 de 2016**, reconoció la protección del río Atrato, acciones provenientes de otros mecanismos constitucionales en donde se buscó que mediante el trabajo participativo de los diferentes entes territoriales y de objeto nacional, se protegiera diferentes afluentes del país de la actividad de la minería y otros, por tal motivo se tomó como referente convertir los espejos de agua mencionados en sujetos de protección del Estado en acción del principio de precautorio en materia ambiental.

DE LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN DE LA BIOLOGÍA Y LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO DE ÉTICA

De los incontables temas científicos relacionados con la profesión de la Biología, de años atrás y en cada una de las celebraciones del Día del Biólogo, se ha tenido como propuesta tener una normatividad más actualizada a las realidades ambientales del país, que ya por más de 30 años se ha quedado corta en materia de dar más herramientas a los biólogos como profesionales y a las profesiones o carreras técnicas o tecnológicas relacionadas, para obtener el nivel, el reconocimiento ajustado a los estándares que requiere una profesión con el nivel de riesgo social que implica la toma de decisiones en estos aspectos; entre ellos la expedición de un código de ética que promueva nuevas prácticas en la profesión que puedan soportar los retos sociales del país, en donde existan criterios de conducta para determinar y dignificar la profesión, se entiende que la presente modificación que se busca a la Ley 22 de 1984, deberá acoger un parámetro de conducta que soporte el Código de Ética de las prácticas profesionales de la Biología.

Cabeseñalar que la apertura social de la profesión de la Biología, ayudará a un reconocimiento mayor de la profesión, aspecto que puede ayudar a legalizar muchas funciones contempladas en otros reglamentos que son acogidos por otros profesionales y no realmente por quienes tienen la competencia legal para hacerlo como lo son los Biólogos nacionales. Buscará la modificación de la Ley 22 de 1984, darle una amplitud superior a la profesión de la Biología, y fundamento de lo buscado ahondar en el fortalecimiento de las asociaciones profesionales para que tengan como función no solamente lo contemplado en la ley que los regula sino una fuerza asociativa que abra las puertas para ejecutar proyectos como agremiados de la Biología y que impulse la profesión como objetivo principal.

por la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda afectar al medio ambiente.

⁹ Tomado de: <http://www.parquesnacionales.gov.co>

Para los efectos de algunos artículos de este proyecto de ley, se tuvo en cuenta la Ley 842 de 2003, *por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones*, por ser una ley con avances significativos en la reglamentación de una profesión.

Este trabajo es el resultado de varios años de estudio y preparación, por parte del Consejo Profesional de Biología (CPBIOL), de funcionarios del Ministerio de Agricultura y a tantos y tantos biólogos del país que con sus apreciaciones nutrieron este proyecto de ley que seguramente no es perfecto, pero sí un gran avance y que se enriquecerá en los subsiguientes debates.

De los Honorables Congressistas,



CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 12 de septiembre del año 2018 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley número 157 con su correspondiente exposición de motivos. Por el honorable Senador *Samy Merheg*; honorable Representantes *Juan Carlos Rivera*.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 091 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 19 de septiembre de 2018

Honorable Representante

SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJÍA

Presidente

Comisión Primera Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Referencia: Informe de ponencia positiva para primer debate al Proyecto de ley Estatutaria número 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.

Cordial saludo:

En cumplimiento del encargo que me hizo la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en los términos consagrados en la Ley 5ª de 1992, me permito radicar informe de ponencia positiva al Proyecto de ley de la referencia, el cual cuenta con los siguientes puntos:

- I. Trámite.
- II. Objeto y contenido del proyecto de ley.
- III. Justificación.
- IV. Contexto normativo
- V. Modificaciones y pliego de modificaciones.

VI. Proposición

I. Trámite

El proyecto de ley en cuestión fue radicado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes por el honorable Representante David Ernesto Pulido Novoa y por la honorable Senadora Maritza Martínez Aristizábal, el pasado 15 de agosto de 2018 y fue debidamente publicado en la *Gaceta del Congreso*.

II. Objeto y contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El proyecto de ley consta de once artículos que establecen lo siguiente:

Artículo 1°. Se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Artículo 2°. Se establece el ámbito de aplicación y se especifican los sujetos que resultan cobijados por las medidas que se establecen.

Artículo 3°. Se establecen los procedimientos para la inscripción y cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Artículo 4°. Se instauran las funciones que tendrá el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Artículo 5°. Se establece el contenido mínimo de en la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos.

Artículo 6°. Se establecen las consecuencias de la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos.

Artículo 7°. Se establece que la operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos será implementado, administrado y operado por el Consejo Superior de la Judicatura. Así mismo, se contempla que la implementación de la herramienta deberá realizarse en un término de seis meses contados a partir de la promulgación de la ley.

Artículo 8°. Se hace una remisión a los principios y reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, en lo que sea aplicable.

Artículo 9°. Se establece que en las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento.

Artículo 10. Se establece que quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad.

Artículo 11°. Vigencia y derogatorias.

III. Justificación

En la actualidad existen tres tipos de instrumentos legislativos dirigidos a garantizar los derechos de cuidado y manutención frente a hijas e hijos naturales o adoptivos, padres y madres naturales o adoptantes, cónyuge inocente y donador cuantioso: (i) sobre los alimentos que se deben por ley a algunas personas, las cuales están contempladas en el artículo 411 del Código Civil; (ii) sobre el Derecho de Alimentos, la obligación alimentaria, y sobre la mora en el cumplimiento de la obligación contemplado en el Código de Infancia y Adolescencia frente a los hijos e hijas; y finalmente, (iii) sobre el delito de inasistencia alimentaria tipificado en el Código Penal.

Así mismo, los conflictos asociados al incumplimiento de la obligación de suplir el derecho a la alimentación pueden tramitarse a través de tres vías judiciales: la primera es ante la jurisdicción ordinaria penal, caso en el cual la Fiscalía es el ente responsable de iniciar la investigación con base en la denuncia por IA; la segunda es por medio de un proceso civil ejecutivo, y por último a través de “la vía civil administrativa de imposición de la medida de amonestación en el marco de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD)”¹.

Además de la existencia de tales mecanismos, es preciso resaltar que la reclamación de alimentos a través de cuota alimentaria puede surtir ya sea por vía administrativa a través de las Comisarías de Familia, o por vía judicial a través de las demandas de alimentos ante los Juzgados de Familia. Sin embargo, estos dos procesos tienen limitaciones derivadas no solo de la congestión propia de los despachos, sino también por los patrones que operan en la asignación de dichas cuotas a través de cualquier decisión administrativa o judicial; lo anterior representa que un porcentaje representativo de las demandas de alimentos por parte de las mujeres, en representación de sus hijas e hijos sean resueltas sin dar cumplimiento a la prevalencia a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por tanto le sean asignadas cuotas insuficientes que no se compadecen realmente con los gastos proporcionales del cuidado y manutención en el marco del derecho de alimentos.

Por otro lado, se presenta dilación en los procesos debido a que en reiteradas oportunidades se lleva a conciliar sobre el incumplimiento por parte del deudor, lo que perpetúa la conducta grave de sustracción de la responsabilidad alimentaria en contra de hijas e hijos, e indirectamente contra la madre, tal como lo contempla la Ley 1257 de 2008 sobre las diferentes formas de discriminación contra las mujeres.

Tal y como se ha señalado anteriormente en el estudio realizado por DEJUSTICIA, sobre el delito de inasistencia alimentaria, se determinó que el número de denuncias por este delito que llegan a la instancia penal es menor en comparación con otro tipo de delitos y que, en efecto, la administración de justicia en el marco del proceso penal actúa de forma más oportuna, aunque en siete de cada diez casos estos terminan con conciliación.

“Aunque observamos un mayor nivel de casos por IA que finalizan en comparación de otros delitos, muy pocos de estos procesos terminan con sentencia condenatoria. La mayoría finaliza por conciliación. Concluimos que los procesos por IA se mueven más, y finalizan en mayor medida, pues en ellos se destina un mayor esfuerzo de funcionarios judiciales al perfeccionamiento de conciliaciones (...). A su vez, las conciliaciones realizadas por fiscales, parecen ser de menor calidad que las realizadas por otros funcionarios”².

El diagnóstico más actualizado que se registra en el tema determina que “los procesos por IA en inventario corresponden a menos del 3% del inventario total de casos para la Ley 906 de 2004. A 2010, dicha proporción es menor a la de todos los demás delitos analizados”. Así mismo, al señalar la proporción de casos que entran y salen

veniencia”. DEJUSTICIA – Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. USAID. Febrero de 2012. Pág. 60. (Subrayado en paréntesis no hace parte del texto original).

² Ibíd. Pág. 75

¹ BERNAL, Carolina, LA ROTA, Miguel. “El delito de la inasistencia alimentaria: Diagnóstico acerca de su con-

al sistema judicial relacionadas con la temática, se evidencia que “*en cuanto a las salidas, los casos por IA representan un porcentaje de casos mayor al de las entradas. Mientras que las entradas por IA equivalen a un décimo de todas las entradas, las salidas corresponden a más de un sexto de los procesos que finalizan por todos los delitos. Ello significa que los procesos de IA se tramitan de manera más eficiente que el promedio de delitos.*”³.

Sin embargo, y gracias a los valiosos aportes del estudio, se evidencia que el derecho al acceso a la justicia que tienen las víctimas del delito de inasistencia alimentaria no se garantiza de manera efectiva si el trámite procesal se finaliza en un 53% con la conciliación, más aún cuando del total de condenas por inasistencia alimentaria representan el 1%⁴, tal y como se indicó anteriormente.

Finalmente, se logra establecer que, “*la base de datos de la Fiscalía indica que, dentro del sistema acusatorio, entre 2005 y 2010 ingresaron cerca de 250 mil procesos por IA. Aproximadamente un sexto de estos casos no había finalizado a enero de 2011; a su turno, la mayoría de los procesos en curso han sido archivados (un 85% de los casos en curso, que corresponden a un 14% de las entradas). Notablemente, alrededor de un 85% de los procesos finalizaron de alguna manera. Más de dos tercios de las salidas son conciliaciones (56% de los procesos que ingresaron). Un poco menos de un tercio de las salidas son preclusiones (un quinto de los ingresos); y un poco más de uno de cada cien procesos culmina en sentencia (de las que nueve de cada diez son condenatorias)*”⁵.

Frente a lo anterior es importante resaltar, como ya se ha dicho, que el incumplimiento de la obligación alimentaria tiene un predominante componente de desigualdad y discriminación contra las mujeres y sus hijas e hijos, pues evidencia la carga cultural estereotipada alrededor del ejercicio y del cuidado.

Al hacerse exigible ante instancias judiciales y/o administrativas la restitución del derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, su restitución se ve limitada por al menos dos grandes obstáculos dentro del proceso penal, (i) “*los problemas relacionados con la certeza probatoria de la evidencia*” y (ii) “*la capacidad económica o ubicación del alimentante*”. Estos dos factores hacen que incluso las conciliaciones por montos menores a los contemplados por la ley, es decir, con base en la presunción del ingreso del salario mínimo por parte del alimentante, no evidencie ser un mecanismo efectivo de coacción frente a su cumplimiento y, por tanto, el incumplimiento de la obligación aún después de la conciliación sea tan reiterado.

Por lo anterior, existe la necesidad de ampliar los mecanismos de exigibilidad y sanción de este delito, que redunde en herramientas más efectivas, sin que ello implique el aumento de penas; es decir, propiciar “*la generación de espacios e incentivos de la obligación alimentaria, más allá de sus propósitos punitivos*”⁶ implica la adopción de medidas legislativas tales como el mejoramiento de los sistemas de identificación, monitoreo y reporte de los(as) alimentos que incumplan su obligación de cuidado y manutención, facilitarían que la sanción legal cumpliera con su objetivo de persuadir a los demandados para que se abstuvieran de cometer o reiterar la conducta delictiva.

Así mismo, la realidad sociocultural acarrea que especialmente los hombres y algunas mujeres no sean conscientes de la relevancia de las obligaciones que tienen frente a sus familiares, al igual que los preceptos culturales instalados en el sistema de valores de quienes administran justicia, quienes asocian la exigencia del cumplimiento alimentario que elevan las mujeres frente a los padres de hijas e hijos como un factor de manipulación por parte de las primeras, todo lo anterior evidencia los factores externos que influyen sobre la ineficacia del aparato de justicia –tanto en lo penal como en lo civil–⁷, y revelan la necesidad de desplegar programas dirigidos a promover el cambio cultural, siendo esta responsabilidad de resorte común al conjunto del Estado, resaltando la responsabilidad de la administración central y las administraciones territoriales.

IV. Contexto normativo

El marco internacional establece instrumentos concretos que reconocen y garantizan la obligación alimentaria como parte fundamental para el ejercicio de los derechos.

Se destaca la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual establece en su artículo 3° que “*en todas las medidas aplicables a los niños y a las niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberá tenerse como consideración primordial la atención del interés superior del niño*”; además señala que “*(...) los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas*”⁸.

⁶ *Ibíd.* Pág. 77

⁷ *Ibíd.* Pág. 84

⁸ Organización de las Naciones Unidas, Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 3°, 20 de noviembre de 1989.

³ *Ibíd.* Pág. 32

⁴ *Ibíd.* Pág. 35

⁵ *Ibíd.* Pág. 35

Así mismo, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de 1989, establece en su artículo 1° que se *“tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte”* y que adicionalmente, *“se aplicará a las obligaciones alimentarias respecto de menores por su calidad de tales y a las que se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales. Los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a esta Convención que la restringen a las obligaciones alimentarias respecto de menores”*.

De igual forma en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año de 2004 en el Consenso de México se acordó por parte de los países participantes (incluido Colombia): *“(...viii) Revisar y examinar las políticas y legislación, a fin de fortalecer la obligatoriedad del pago de asistencia económica de niños, niñas, adolescentes, así como instar a los Estados a convenir tratados para el cobro de las obligaciones de los evasores(...)”*⁹.

Con relación a lo anterior, y tratándose de una violencia económica que también afecta a las mujeres responsables del cuidado de sus hijas e hijos, en el presente proyecto es preciso considerar que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), ratificada por Colombia mediante la aprobación de la Ley 51 de 1981, establece disposiciones para que los Estados parte implementen medidas para la erradicación de las múltiples formas de discriminación contra las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado.

Seguidamente, a mediados de la década de los noventa, e igualmente a través del Bloque de Constitucionalidad el Estado Colombiano ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará), a través de la Ley 248 de 1995. Allí se define violencia contra la mujer como *“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”*. Este reconocimiento es determinante, pues abre el espectro de intervención sobre las características que recrean las formas de violencia contra las

mujeres, y es en ese sentido que la violencia económica que nos ocupa adquiere preponderancia para la consideración del ejercicio pleno de sus derechos, lo cual es plenamente identificado en el ordenamiento jurídico colombiano con la expedición de la Ley 1257 de 2008, que define la violencia contra la mujer en el artículo 2°: *“Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”*. Asimismo, se establecen las definiciones de los tipos de daños contra la mujer, artículo 3°: *“(...) d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer”*.

Igualmente, la Constitución Política de Colombia ha establecido derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes así:

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños. la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. (...) Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

De igual forma, el Derecho a los alimentos de las niñas, niños y adolescentes está reconocido ampliamente en el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, donde se establece:

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo

⁹ Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. Consenso de México. 2004. Ciudad de México D. F.

integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”.

En este mismo instrumento, se establecen medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria, y las respectivas sanciones a las que habrá lugar cuando el deudor esté en mora.

En relación con los derechos fundamentales de las mujeres, los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, reconocen el derecho a la igualdad y no discriminación que debe regir y del cual se desprenden las premisas fundamentales para la reivindicación de sus derechos.

Por otro lado, la Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto, señalando que la obligación alimentaria, además, se subordina al principio de proporcionalidad en la medida en que su imposición consulta la capacidad económica del alimentante, *así como a la necesidad concreta del alimentario*. (Sentencia C-875 de 2003 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

De otro lado, en Sentencia C-011 de 2002, el Alto Tribunal Constitucional definió el contenido y alcance de la obligación alimentaria, manifestando que *“(...)no es solamente una prestación de carácter económico, sino, especialmente, una manifestación del deber constitucional de solidaridad y de responsabilidad, fundadas, de una parte, en la necesidad del alimentario y en la capacidad del alimentante y, de otra, en la libre determinación de constituir una familia y de elegir el número de hijos que se desea procrear.”.*

En otros pronunciamientos se establece que la obligación alimentaria también tiene fundamento constitucional en el deber de solidaridad. En la Sentencia C-237 de 1997 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), esta Corporación estableció que *“[e]n esencia, la obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles. Ella presupone (como las otras) la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho (...) Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. (...) En síntesis, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obliga. El deber de asistencia del Estado es subsidiario, y se limita a atender las necesidades*

*de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”*¹⁰.

El Código Penal tipifica en su artículo 233 el delito de inasistencia alimentaria:

“Artículo 233 (...) El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Y también define que: *“La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor”.*

El Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 129 indica como parte de las medidas para quienes no han cumplido con las obligaciones alimentarias de sus hijas e hijos que:

“(...) Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaria y será reportado a las centrales de riesgo.”.

De igual forma el artículo 135 de este mismo Código se estipula que: *“Con el propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de los representantes legales del niño, niña o adolescente o el Defensor de Familia podrán promover, ante los jueces competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante”.*

V. Modificaciones y pliego de modificaciones

Para el segundo debate del **proyecto de ley 091 de 2018 Cámara**, se proponen las siguientes modificaciones:

¹⁰ *Ibíd.* Pág. 12

Texto radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes	Texto propuesto para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes	Justificación de la modificación
<p>Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario.</p> <p>La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales.</p>	<p>Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario.</p> <p>La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales.</p> <p><u>Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil Colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo.</u></p>	<p>Se incluye un Parágrafo en el artículo 2 del proyecto, con la finalidad de especificar que todos los deudores alimentarios morosos de los titulares de derechos alimentarios del artículo 411 del Código Civil Colombiano, es decir, padres a hijos y viceversa, cónyuge culpable a cónyuge divorciado, padres adoptantes a hijos adoptivos y viceversa, y beneficiario de donación a donador cuantioso, que incurran en las condiciones del mismo artículo.</p>
<p>Artículo 6°. <i>Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.</i> La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inhabilidad para contratar con el Estado. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 3. Impedimento para perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro. 4. Para autorizar una escritura pública, la autoridad competente deberá solicitar la certificación expedida por el Redam de ambas partes del negocio jurídico, cuando se trate de personas naturales y, del representante legal, cuando una de estas sea persona jurídica. En caso de que aparezca registro de incumplimiento de obligaciones alimentarias, el negocio jurídico no podrá perfeccionarse hasta tanto se regularice la situación. 5. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el Registro. 	<p>Artículo 6°. <i>Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.</i> La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inhabilidad para contratar con el Estado. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 3. Impedimento para perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro. 4. Para autorizar una escritura pública, la autoridad competente deberá solicitar la certificación expedida por el Redam de ambas partes del negocio jurídico, cuando se trate de personas naturales y, del representante legal, cuando una de estas sea persona jurídica. En caso de que aparezca registro de incumplimiento de obligaciones alimentarias, el negocio jurídico no podrá perfeccionarse hasta tanto se regularice la situación. 5. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el Registro. 6. <u>Impedimento para solicitar licencia de conducción o documento análogo ante las autoridades de tránsito y transporte habilitadas para tal fin.</u> 7. <u>Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces.</u> <p><u>Parágrafo. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés.</u></p>	<p>Se incluyen los numerales 6° y 7° al artículo sexto y un parágrafo al mismo, con la finalidad de crear dos nuevas medidas que permitan volver más drásticas las consecuencias para los deudores alimentarios morosos, como lo son que no se les pueda expedir licencia de conducción ni permiso de salida del país para quienes estén reportados en el registro.</p> <p>Por último, en el parágrafo nuevo, se establece que la información contenida en el Redam deberá ser remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, con el fin de generar este reporte negativo al deudor.</p> <p>El parágrafo y los numerales nuevos propuestos, fueron aprobados por la plenaria del Senado de la República en el trámite que tuvo el Proyecto de ley número 08 de 2017 que tenía el mismo objeto pero que fue archivado por tránsito de legislatura.</p>

VI. Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa me permito rendir ponencia positiva y, por tanto, solicito a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al **proyecto de ley número 091 de 2018 Cámara**, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.

De los honorables Congressistas,



David Ernesto Pulido Novoa
Representante a la Cámara

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 091 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto.* La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Artículo 2°. *Ámbito de aplicación.* La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario.

La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales.

Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil Colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo.

Artículo 3°. *Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.* El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez que conoce o conoció del proceso ejecutivo de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en

mora por tres (3) días, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma. La decisión del juez podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de tres (3) días para resolverlo.

Parágrafo Primero. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días a la Entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma.

Parágrafo Segundo. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora.

Parágrafo Tercero. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días a la Entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro.

Parágrafo Cuarto. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos caducará en un término de cuatro (4) años, contado a partir de la fecha en la cual se realiza la inscripción.

Parágrafo Quinto. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo.

Artículo 4°. *Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.* Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son:

1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos;
2. Expedir gratuitamente los certificados que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

Artículo 5°. *Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.* El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso.
2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso.

3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso.

4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria.

5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación.

6. Identificación del Despacho Judicial que ordena el registro.

7. Fecha del registro.

Artículo 6°. *Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.* La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias:

1. Inhabilidad para contratar con el Estado. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.

2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

3. Impedimento para perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro.

4. Para autorizar una escritura pública, la autoridad competente deberá solicitar la certificación expedida por el Redam de ambas partes del negocio jurídico, cuando se trate de personas naturales y, del representante legal, cuando una de estas sea persona jurídica. En caso de que aparezca registro de incumplimiento de obligaciones alimentarias, el negocio jurídico no podrá perfeccionarse hasta tanto se regularice la situación.

5. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el Registro.

6. Impedimento para solicitar licencia de conducción o documento análogo ante las autoridades de tránsito y transporte habilitadas para tal fin.

7. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces.

Parágrafo. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés.

Artículo 7°. *Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.* El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias.

Parágrafo Primero. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como operador de la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés.

Parágrafo Segundo. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 8°. *Remisión General.* Los principios y reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, o la que la reemplace o modifique, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Artículo 9°. *Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.* En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento.

Artículo 10. *Término para exigir alimentos.* Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad.

Parágrafo. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas.

Artículo 11° *Vigencia y derogatorias.* La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.


David Ernesto Pulido Novoa
Representante a la Cámara

**PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 046 DE 2017
CÁMARA**

por medio de la cual se garantizan los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 12 de septiembre de 2018.

Honorable Representante:

**JAIRO GIOVANNY CRISTANCHO
TARACHE**

Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad.

Asunto: Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 046 de 2017 Cámara, por medio de la cual se garantizan los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones.

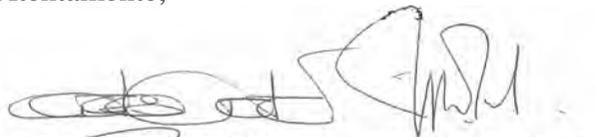
Respetado Presidente:

En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Honorable Cámara de Representantes, procedemos a rendir informe de ponencia para segundo debate en Cámara al proyecto de ley en referencia.

El presente informe está compuesto por siete (7) apartes:

- I. Antecedentes de la iniciativa.
- II. Objeto y contenido.
- III. Justificación.
- IV. Consideraciones.
- V. Marco normativo
- VI. Pliego de modificaciones.
- VII. Proposición.
- VIII. Texto propuesto para segundo debate en Cámara.

Atentamente,



CARLOS EDUARDO ACOSTA L.
Coordinador ponente

FABER ALBERTO MUÑOZ C.
Ponente

**INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
046 DE 2017 CÁMARA**

por medio del cual se definen acciones que promueven la protección integral en salud, educación, orientación profesional a la familia y formación para la inserción laboral de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se modifican otras disposiciones.

1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

En la Legislatura 2015-2016, la honorable Representante María Fernanda Cabal Molina

radicó el Proyecto de ley número 083 de 2015 Cámara, por el cual se crea el Sistema General para la Atención Integral y Protección a Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y condiciones similares y se dictan otras disposiciones. En septiembre del mismo año el honorable Representante Rafael Eduardo Paláu Salazar fue designado como coordinador ponente del proyecto, el cual fue retirado. En 2016, el honorable Representante Paláu dio inicio a un trabajo conjunto con madres de niños, adolescentes con TEA y con instituciones que agrupan a esta población, orientado a conocer acerca de su situación. Se llevaron a cabo dos audiencias públicas, de las cuales se concluyó que en Colombia la población con TEA no cuenta con la suficiente protección y goce de sus derechos.

El 27 de julio del mismo año se radicó el Proyecto de ley número 046 de 2017, por medio de la cual se garantizan los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista, ante el Secretario de la Cámara de Representantes, teniendo como autores a los Representantes: Rafael Eduardo Paláu Salazar, María Fernanda Cabal Molina y Esperanza Pinzón de Jiménez. La Mesa Directiva de la Comisión Séptima designó como ponentes para segundo debate a los Representantes: Rafael Eduardo Paláu Salazar, Esperanza Pinzón de Jiménez y Guillermina Bravo Montaña.

El 21 de agosto de 2018, por instrucción de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima, el Representante Carlos Eduardo Acosta fue designado como coordinador ponente para segundo debate del mismo, junto con el Representante Faber Alberto Muñoz, como ponente.

2. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO

2.1. Objeto: el presente proyecto de ley tiene por objeto definir acciones que promuevan el diagnóstico temprano, tratamiento, acceso a educación inclusiva, protección integral en salud, orientación profesional a la familia y formación para la inserción laboral de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se modifican otras disposiciones.

2.2. Contenido: el proyecto de ley tiene seis capítulos:

- Capítulo I: Generalidades.
- Capítulo II: Protección integral en salud para la población con TEA
- Capítulo III: Inclusión Social de la Población con TEA a través de las TIC.
- Capítulo IV: Garantizar el acceso y desarrollo de una educación inclusiva de la población con TEA.
- Capítulo V: Formación, promoción e inserción para el trabajo de las personas con TEA.

- Capítulo VI: Fomento de las actividades recreativas y culturales de la población con TEA.

- Capítulo VII: Permiso de circulación vehicular para familiares y cuidadores de personas con TEA.

3. JUSTIFICACIÓN (basada en los hallazgos investigativos actuales y audiencias públicas anteriores):

- Debido al desconocimiento del tema, los padres tardan muchos años en tener un diagnóstico real. Si se detecta a tiempo, y se hace el abordaje correspondiente desde la primera infancia, se evitarán mayores problemas psicosociales para el paciente y su familia, reduciendo los costos en atención en salud. Con relación a este tipo de trastornos no se tienen cifras ni estadísticas recientes, sin embargo, el Ministerio de Salud en el documento *Abecé sobre TEA y Terapias ABA*, registra lo siguiente: “En el año 2006 se ordenaron vía tutela 134 tratamientos –Terapias ABA–, con un costo de \$236 millones; en el año 2014 se ordenaron 31.186, con un costo de \$62.863 millones¹.”

- Es importante trabajar en la socialización y capacitación de los protocolos y rutas existentes, permitiendo la capacitación de los docentes y de estos a las familias. Es necesario hacer adaptaciones curriculares (e institucionales) que eviten que los padres deban buscar apoyo terapéutico externo.

- En Colombia no hay estadísticas precisas acerca de la población con TEA. Solo se usa la inscripción voluntaria en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD).

- No hay programas flexibles para alumnos con TEA (quienes requieren apoyos y ajustes al interior del aula); tampoco para aquellos que tienen capacidades y talentos excepcionales. Los docentes, en su mayoría, no cuentan con herramientas que garanticen un proceso educativo exitoso para esta población.

- Las EPS no cumplen con el protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños con Trastornos del Espectro Autista. Este protocolo no incluye a los adultos y, por una incorrecta aplicación, a veces está siendo usado para negar los servicios a la población con TEA.

- No tienen acceso específico a programas de recreación, deporte y cultura.

- No hay oportunidades específicas de trabajo, ni se incluye en ninguna atención del Estado a los adultos con TEA. Una vez los padres

son mayores o fallecen, las personas adultas con TEA quedan sin apoyo familiar, ni del Estado.

- No se realizan campañas de toma de conciencia en la comunidad que busquen cambiar imaginarios que se tienen sobre los TEA, lo cual genera barreras para su inclusión social.

- Gran número de los profesionales que atienden a la población con TEA desconocen tanto sus dificultades como sus habilidades, por lo tanto, no se prestan los apoyos y ajustes que requieren para una adecuada inserción social integral.

- Muchos padres deben cubrir de su propio peculio los honorarios de los profesionales de apoyo que son requeridos para obtener el cupo en una institución educativa y no hay claridad entre Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud y Protección Social acerca de cómo y quién es responsable de este proceso.

- En la mayoría de los casos las familias, para obtener un tratamiento para su hijo con TEA, deben recurrir a recursos propios (que no todos los tienen) y acciones legales que conllevan a un mayor desgaste emocional y económico y que no siempre resultan efectivos.

- Las familias están solas y desprotegidas, no hay redes de apoyo.

- En muchos casos y como resultado de la falta de una atención oportuna y acertada, algunas personas con TEA son medicadas como única respuesta a su comportamiento, lo cual genera efectos secundarios a los que no se da seguimiento, ni el tratamiento adecuado, conllevando a desmejorar notablemente la calidad de vida de la persona con esta condición y, por consiguiente, a su familia.

3.1. CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROYECTO

La dignidad humana es el fundamento de los Derechos Humanos, por tanto, se constituye en la base del Estado de Derecho. Por ello, es menester revisar las experiencias internacionales respecto del tema y tener presente la recomendación de incluir los Trastornos del Espectro Autista como una discapacidad social. Esta puede ser “la puerta” de acceso para una regulación que garantice diagnósticos oportunos, apoyos y ajustes a los protocolos de atención en salud existentes, permitiendo mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno familiar.

Reconocer el TEA como un tipo de capacidad especial, y no solo una discapacidad, puede abrir el debate frente a una real y efectiva inclusión social, puesto que muchos de los pacientes con TEA se desarrollan de una forma normal con relación a las demás personas, particularmente en términos intelectuales, aunque dada su condición presenten alteraciones en su interacción social y

¹ MINISTERIO DE SALUD. “*Abecé sobre TEA y Terapias ABA*”. 2015.

de comunicación, lo cual no es impedimento para su desarrollo integral y de acceso a las diferentes esferas sociales.

4. MARCO NORMATIVO

4.1. NACIONAL:

- **Ley 361 de 1997.** “*Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones*”.

- **Resolución 2565 de 2003.** “*Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales*”.

- **Ley 1145 de 2007.** “*Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones*”.

- **Ley 1306 de 2009.** “*Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados*”.

- **Ley 1616 de 2013** “*Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones*”.

- **Ley 1618 de 2013.** “*Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad*”.

- **Ley 1751 de 2015.** “*Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones*”.

- **Resolución 779 de 2016.** “*Por la cual se reglamenta el Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad en la Universidad Nacional de Colombia*”.

- **Decreto 1421 de 2017.** “*Por medio del cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad*”.

4.2. INTERNACIONAL:

- **Ley 762 de 2002:** “*Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad*”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

- **Ley 1346 de 2009** “*Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

4.3. JURISPRUDENCIA:

- Sentencia T-608 de 2007: Niños y adolescentes, son sujetos doblemente amparados por la protección especial constitucional reforzada.

- En la Sentencia T-818 de 2008, la Corte Constitucional se pronunció acerca de la salud y la necesidad de su protección respecto a aquellas personas con discapacidad.

- En Sentencia T-576 de 2008: Necesidad de que la prestación del servicio de salud se dé conforme al principio de atención integral.

- Para proteger el derecho fundamental a la salud de las personas que padecen algún tipo de enfermedad neurológica, en especial de los menores de edad, la Corte ha ordenado a distintas EPS practicar tratamientos no incluidos en el POS: Sentencia T-586 de 2013.

4.4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- “Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis años con autismo” (ICBF y SISD), 2010.

- “Protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastornos del espectro autista”. Ministerio de Salud y Protección Social. Marzo, 2015.

- “Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva”. Marzo de 2017.

- “Abecé de la discapacidad” (documento del Ministerio de Salud).

4.5. DERECHO COMPARADO:

- Ley 220 de 2012. Puerto Rico: Ley BIDA (Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo).

- Ley 27.043 de 2014. Argentina: Declaración de interés nacional respecto al abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

- Ley 30150 de 2014. Perú: “Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES

De conformidad con las observaciones expuestas anteriormente, se considera pertinente realizar los siguientes ajustes:

CONTENIDO	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
TÍTULO	TÍTULO: “Por medio del cual se garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista”.	TÍTULO: “Por medio del cual se definen acciones que promuevan la protección integral en salud, educación, orientación profesional a la familia y formación para la inserción laboral de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones”.
GENERALIDADES	Artículo 1°. <i>Objeto de la ley.</i> La presente ley tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en igualdad de condiciones que las personas en situación de discapacidad en Colombia, brindándoles los apoyos y ajustes razonables que requieran para una efectiva inclusión de conformidad con la normatividad vigente en nuestro país y con los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte.	Artículo 1°. <i>Objeto de la ley.</i> “Por medio del cual se definen acciones que promuevan el diagnóstico temprano, tratamiento, acceso a educación inclusiva, protección integral en salud, orientación profesional a la familia y formación para la inserción laboral de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones”.
	Artículo 2°. <i>Población objeto.</i> Serán destinatarias de esta ley todas las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).	Queda igual.
	Artículo 3°. <i>Definición.</i> Entiéndase como Trastornos del Espectro Autista (TEA) al grupo de alteraciones del desarrollo en la persona, que presentan características crónicas y afectan de manera distinta a cada individuo. Se definen dentro de una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas basados en la tríada de Wing que incluye: alteraciones en la comunicación, flexibilidad e imaginación e interacción social.	Queda igual.
	Artículo 4°. <i>Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo.</i> Celébrese en Colombia el 2 de abril de cada año como Día Internacional de la Concienciación sobre Autismo.	Artículo 4°. <i>Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.</i> Se establecerá en Colombia el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, el cual se celebra el día dos (2) de abril de cada año, desarrollando acciones que promuevan su conocimiento, sensibilización y promulgación de derechos, para lo cual el Ministerio de Salud coordinará con las demás entidades el desarrollo de esta actividad en el ámbito nacional, departamental y local. El Ministerio de Salud presentará ese día los avances en la atención integral de la población con TEA, además de los estudios e investigaciones que promuevan nuevas tecnologías en salud para el diagnóstico temprano y su tratamiento efectivo.

CONTENIDO	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
	<p>Artículo 5°. <i>Campañas pedagógicas sobre concienciación del TEA.</i> Los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación Nacional, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y de Justicia, realizarán campañas pedagógicas sobre la concienciación de los trastornos del espectro autista, para que la población en general no utilice el término autismo, autista o sus acepciones como sinónimo de ineptitud, distracción, hostilidad y/o su asociación con actos criminales o terroristas o de cualquier forma peyorativa, de conformidad con el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.</p> <p>Parágrafo. La persona que utilice el término autismo, autista o sus acepciones peyorativamente, o genere actos de hostigamiento sobre una persona o un grupo de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), podrá ser investigada y sancionada por hostigamiento de conformidad con el artículo 134B del Código Penal colombiano.</p>	<p>Artículo 5°. <i>Campañas pedagógicas sobre concienciación del TEA.</i> Los Ministerios de Salud y Protección Social, de Educación y de Trabajo, las entidades territoriales y el Sistema Nacional de discapacidad, diseñarán y realizarán conjuntamente las campañas pedagógicas de sensibilización y concienciación sobre la realidad que viven los pacientes con Trastornos del Espectro Autista, sus derechos y atención integral.</p> <p>Parágrafo 1°. Se promoverá el buen uso del término autismo, generando procesos de sensibilización social que promuevan el respeto, entendiendo que las personas con TEA no se definen por su diagnóstico, sino por su dignidad humana.</p> <p>Parágrafo 2°. Quien incurra en actos de discriminación o maltrato contra una persona o un grupo de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en la ley penal.</p>
	<p>Artículo 6°. <i>Trastornos del Espectro Autista (TEA) en la categoría de la discapacidad mental.</i> Inclúyase a los Trastornos del Espectro Autista (TEA), en la categoría de discapacidad mental, de acuerdo a clasificación internacional contemplada en el Manual Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría.</p>	<p>Artículo 6°. <i>Modifíquese el literal d) del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007.</i></p> <p>El literal d) del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007, quedará así:</p> <p>“Artículo 10. El CND estará conformado por:</p> <p>d) Representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, los cuales tendrán la siguiente composición:</p> <p>(...)</p> <p>– Un representante de organizaciones de padres de familia o cuidadores de personas con discapacidad cognitiva como síndrome de Down, trastorno del desarrollo intelectual, Trastorno del Espectro Autista y otras. La representación será alternada entre cada una de las discapacidades cognitivas.</p> <p>(...).</p>
	<p>Artículo 7°. <i>Derechos.</i> Teniendo en cuenta que las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) se encuentran en permanente condición de vulnerabilidad y discriminación, se garantiza que lo estipulado en la Ley 1618 de 2013, en sus artículos 9° y 10 beneficia, cubre y da respuestas a las necesidades de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) durante su ciclo de vida, así:</p>	<p>Artículo 7° (nuevo). <i>Conformación de los Comités Departamentales, Distritales, Municipales y Locales de Discapacidad.</i> En la conformación de los Comités Departamentales, Distritales, y Municipales de Discapacidad, establecidos en el artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, el representante de las organizaciones de padres de familia o cuidadores de personas con discapacidad mental y/o cognitiva, como síndrome de Down, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del Espectro Autista y otras, serán alternados cada uno de ellos, según el procedimiento que establezca el gobernador o el alcalde.</p>

CONTENIDO	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
<p>PROTECCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LA POBLACIÓN CON TEA</p>	<p>a) El protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastornos del espectro autista deberá ser incluido en el Sistema General de Salud, Plan de Beneficios, debidamente codificado para que el médico tratante lo pueda prescribir.</p> <p>Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social en un término de seis (6) meses de promulgada esta ley, reglamentará esta inclusión.</p> <p>Parágrafo 2°. Las tutelas falladas antes de la vigencia de esta ley deberán ser atendidas por las EPS en su integridad, pues han hecho tránsito a cosa juzgada.</p> <p>b) Las personas con TEA mayores de 18 años, recibirán atención integral del TEA.</p> <p>Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social en un término de 6 meses iniciará el desarrollo de una guía de atención integral para las personas mayores de 18 años con Trastornos del Espectro Autista, basada en buenas prácticas y el respeto por los derechos humanos de las personas con TEA, el cual deberá ser aplicado durante todo su ciclo de vida.</p> <p>Parágrafo 2°. Durante el tiempo que el Ministerio de Salud y Protección Social elabore e implemente la guía antes señalada, las personas mayores de 18 años con TEA, tendrán derecho a atención integral en salud.</p>	<p>Artículo 8°. <i>Protección integral en salud.</i> En el marco del Sistema General de Seguridad Social y fundamentándose en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, se deberán garantizar los derechos en salud de la población con TEA, dando cumplimiento a los protocolos y guías de atención integral, para lo cual se deberá:</p> <p>a) Garantizar la atención integral en salud a las personas con Trastornos del Espectro Autista a través de un equipo interdisciplinario que responda a la condición particular de salud, bajo el criterio, pertinencia y autonomía profesional.</p> <p>b) Asegurar que los pacientes en condición de discapacidad sensorial, social, intelectual, mental, trastornos del espectro autista y otras, junto con su familia, accedan a una orientación e información oportuna, clara, apropiada y suficiente por parte del profesional tratante, de manera que puedan participar activamente en los procesos de atención integral en salud y rehabilitación funcional, alcanzando la máxima autonomía posible.</p> <p>Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección social en un término de seis (6) meses formulará una guía de atención integral para las personas con Trastornos del Espectro Autista; esta guía estará basada en buenas prácticas y en el respeto por los derechos humanos.</p> <p>Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social también garantizará que las familias y cuidadores de las personas con TEA reciban atención integral en salud, entendida como el apoyo interdisciplinario que deben recibir para comprender, aceptar, convivir e integrarse a la vida de un paciente con TEA</p> <p>Parágrafo 3°. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá realizar la identificación y caracterización de la población con TEA, con miras a diseñar, formular e implementar una política pública articulada con las demás entidades correspondientes.</p> <p>Parágrafo 4°. Las personas con TEA, sus familias o cuidadores tendrán prelación como beneficiarios de los diferentes programas sociales que establezca el Gobierno nacional, de acuerdo con el puntaje obtenido en la encuesta del Sisbén.</p>
	<p>Artículo 8°. <i>Estudios epidemiológicos.</i> De conformidad con el artículo 39 de la Ley 1616 de 2013, se deberán incorporar a las investigaciones estudios epidemiológicos de los TEA, para conocer sus causas, evolución en el país.</p>	<p>Artículo 9°. <i>Investigaciones en salud y estudios epidemiológicos.</i> Se deberán incorporar a las investigaciones en salud y estudios epidemiológicos los TEA, para conocer mejor sus causas, diagnóstico y tratamientos.</p>

CONTENIDO	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
		<p>Artículo 10 (nuevo): Artículo 10. <i>Prohibiciones.</i> Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), incluidos los profesionales de la salud, se abstendrán de incurrir en acciones u omisiones que promuevan, coloquen o hagan uso de barreras que obstaculicen la continuidad de los tratamientos médicos, afectando o negando los servicios en salud que requieran las personas con TEA, so pena de las sanciones en las que puedan incurrir por la no prestación de los servicios de salud.</p>
<p>INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN CON TEA A TRAVÉS DE LAS TIC.</p>	<p>Artículo 9°. <i>Desarrollo de software para la población con TEA.</i> El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social en un término de 6 meses: desarrollará <i>softwares</i> basados en un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, para favorecer el desarrollo de la comunicación y la inclusión social de la población con TEA y discapacidad intelectual. Dicho <i>software</i> será distribuido de forma gratuita.</p>	<p>Artículo 11. <i>Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población con TEA.</i> El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dispondrá de las tecnologías y su soporte técnico para favorecer los procesos de inclusión social de la población con TEA, para lo cual contará con la asesoría, acompañamiento y financiamiento de los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación y Trabajo.</p> <p>Dichas herramientas serán distribuidas de forma gratuita a nivel nacional sin ningún tipo de restricción para las personas con TEA, sus familias y las entidades públicas y privadas cuyo objeto social se oriente a la atención de esta población.</p> <p>El Ministerio promoverá el acceso a la ciencia, tecnología e innovación de las personas con TEA generando espacios de inclusión para que se desarrollen integralmente.</p>
<p>GARANTIZAR EL ACCESO Y DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LA POBLACIÓN CON TEA</p>	<p>Artículo 10. <i>Del derecho a la educación de la población con TEA.</i> El Ministerio de Educación Nacional en un término de seis (6) meses después de promulgada esta ley, deberá incluir en el decreto reglamentario, según lo establece la Ley 1618 de 2013, los siguientes aspectos, entre otros:</p> <p>a) La obligación de las Secretarías De Educación Distrital o Municipal, de asignar cupo a la persona con TEA, en la institución educativa pública o privada bajo la modalidad de convenio, en la que exista programa de inclusión para personas con TEA.</p> <p>b) Que la institución educativa asignada, a través de los profesionales de apoyo realicen la evaluación pertinente a la persona con TEA, para determinar:</p> <p>i) Nivel o grado de escolaridad al cual ingresa el alumno; fortalezas y necesidades para proyectar flexibilización curricular;</p> <p>ii) Si el alumno necesita acompañamiento en aula regular;</p>	<p>Artículo 12. <i>Promoción de educación inclusiva para los pacientes con TEA, en las instituciones educativas públicas y privadas.</i> Los pacientes diagnosticados con TEA tienen derecho a recibir una educación inclusiva, de calidad y acorde con sus creencias y cultura, por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional y sus entidades adscritas, garantizarán la formulación, implementación y desarrollo de planes, programas y proyectos necesarios para la construcción de modelos de enseñanza, teniendo en cuenta que su aprendizaje es diferente, para lo cual se potencializará el desarrollo de sus habilidades y talentos, haciendo las adaptaciones curriculares que se requieran.</p> <p>Así mismo, se generarán acciones interdisciplinarias que permitan la socialización y capacitación de la comunidad educativa en los protocolos y rutas de atención integral existentes, brindando herramientas que faciliten su integración al entorno escolar, con la participación de las familias y entidades correspondientes.</p>

CONTENIDO	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
	<p>c) La certificación que debe emitir la institución educativa en la que conste que el alumno requiere acompañamiento en aula regular y el procedimiento para que la Secretaría de Educación Distrital o Municipal asigne de manera inmediata y oportuna a la persona con TEA un acompañante pedagógico en aula regular, si procede;</p> <p>d) Definir qué profesionales podrán prestar sus servicios de prácticas, como acompañante pedagógico en aula regular, la forma o convenio institucional por parte de las universidades con las Secretarías de Educación Distrital y Municipal para tal fin;</p> <p>e) Definir características del acompañamiento pedagógico en aula regular, en cuestión de si es permanente, alternado, la evaluación y tiempo de acción del mismo;</p> <p>f) La garantía de que las Secretarías de Educación Distrital o Municipales envíen personal de apoyo suficiente a las instituciones educativas en concordancia con el número de alumnos inscritos con alguna situación de discapacidad;</p> <p>g) Garantizar que las instituciones educativas reporten con tiempo suficiente al ICFES o a la entidad que haga sus veces, sobre el número de alumnos con TEA que requieran apoyos específicos para presentar las diferentes pruebas de Estado;</p> <p>h) Procesos de inclusión en programas universitarios para las personas con TEA que se inscriban;</p> <p>i) Elaboración de pruebas de admisión a universidad para personas con TEA, diferenciadas, y</p> <p>j) La organización de procesos de adaptación y acompañamiento para personas con TEA que ingresen al contexto universitario.</p> <p>Artículo 11. <i>Currículos flexibles para las personas con TEA.</i> El Ministerio de Educación Nacional garantizará que los alumnos con TEA tengan flexibilización curricular en igualdad de condiciones que las demás discapacidades, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013.</p>	
		<p>Artículo 13. <i>Garantizar el acceso a la educación superior de las personas con TEA.</i> El Ministerio de Educación garantizará el acceso a las instituciones de educación superior, mediante la flexibilización de los requisitos de admisión, incluida la adecuación de las diferentes pruebas de Estado.</p>

CONTENIDO	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
	<p>Artículo 12. <i>Abordaje del TEA en currículos universitarios.</i> Las facultades de Medicina y Educación podrán incluir dentro de sus currículos el abordaje científico del TEA, de conformidad con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.</p>	<p>Eliminar.</p>
<p>FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INSERCIÓN PARA EL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON TEA</p>	<p>Artículo 13. <i>Promoción de la inserción laboral de las personas con TEA.</i> El ministerio de Trabajo y el Sena promoverán, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, que las personas con TEA tendrán acceso al trabajo en igualdad de condiciones que las otras discapacidades.</p> <p>Las empresas públicas o privadas que se dedican a la oferta y demanda de empleo, podrán crear una sección accesible para personas en situación de discapacidad (incluida la población con TEA) en donde puedan ofertar su potencial laboral.</p>	<p>Artículo 14. <i>Formación, promoción e inserción laboral de las personas con TEA.</i> El Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) promoverán el acceso al trabajo de las personas con TEA, en igualdad de condiciones a las otras discapacidades, para lo cual será necesario que:</p> <p>a) El Ministerio de trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Consejo Nacional de Discapacidad, desarrollen guías que brinden la orientación necesaria para la aplicación de las pruebas de ingreso laboral a las personas con discapacidad cognitiva, mental y social, garantizando que las empresas públicas o privadas, realicen un proceso de selección inclusivo.</p> <p>b) El Ministerio de Trabajo, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) garanticen servicios y asesoría técnica a las empresas, promoviendo la accesibilidad laboral de la población con TEA, generando procesos de capacitación que permitan que tanto el empleador como los trabajadores en general conozcan la condición de los TEA brindando el apoyo que desde salud ocupacional se requiera, para favorecer su inclusión laboral.</p> <p>c) Se promueva el empleo con apoyo para las personas con TEA en igualdad de oportunidades.</p> <p>d) Se realicen acciones conjuntas entre los empresarios, facilitadores y las personas con TEA, para garantizar el éxito de la inclusión laboral.</p>
	<p>Artículo 14. <i>Ferías empresariales para personas con discapacidad.</i> El Sena a nivel nacional y regional, garantizará que en todas las ferias empresariales-laborales tengan participación efectiva y accesible la población en situación de discapacidad (incluida la población con TEA), para que estos puedan acceder a las distintas ofertas de empleo de acuerdo a sus capacidades laborales.</p>	<p>Artículo 15. <i>Promoción del empleo para las personas con TEA.</i> El Servicio Nacional de Enseñanza y Aprendizaje promoverá la participación efectiva y accesible de la población con TEA, para que puedan acceder a las distintas ofertas de acuerdo con sus bolsas de empleo.</p> <p>De igual forma, el Sena garantizará la formación técnica y tecnológica de la población con TEA, para lo cual priorizará y flexibilizará los parámetros de ingreso.</p>

CONTENIDO	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN TEA		Artículo 16 (nuevo). <i>Fomento de actividades recreativas y culturales como parte del desarrollo integral y de inclusión social de la población con TEA.</i> Se deberá incluir dentro de las políticas, programas, planes y guías de atención de las personas con TEA, la práctica de actividades recreativas y culturales como parte del desarrollo integral y de inclusión social.
PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR PARA FAMILIARES Y CUIDADORES DE PERSONAS CON TEA		Artículo 17 (nuevo). <i>Permiso de circulación vehicular para familiares y cuidadores de personas con TEA.</i> Las Secretarías de Movilidad, Tránsito o quien haga sus veces otorgarán permisos especiales de circulación y parqueo a los familiares y cuidadores de personas con TEA. La situación de discapacidad debe ser claramente acreditada con la certificación médica correspondiente, expedida por el médico tratante perteneciente a su EPS. La excepción aplica únicamente para la inscripción de un vehículo por persona con discapacidad. Parágrafo. Si el vehículo es requerido en vía por la autoridad de tránsito, deberá estar transportando a quien es beneficiario de la medida, o de lo contrario, se procederá con la imposición de la orden de comparendo respectiva.
	Artículo 15. <i>Vigencia y derogatorias.</i> La presente ley rige a partir de su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.	Queda igual.

6. PROPOSICIÓN

Considerando los argumentos expuestos, presentamos ponencia positiva y solicitamos a la plenaria de Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley número 046 de 2017 Cámara, *por medio del cual se definen acciones que promueven el diagnóstico temprano, tratamiento, acceso a educación inclusiva, protección en salud, capacitación profesional e inserción laboral de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones.*

7. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

TÍTULO: *Por medio del cual se definen acciones que promuevan la protección integral en salud, educación, orientación profesional a la familia y formación para la inserción laboral de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones.*

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1°. *Objeto de la ley.* “Por medio del cual se definen acciones que promuevan el diagnóstico temprano, tratamiento, acceso a

educación inclusiva, protección integral en salud, orientación profesional a la familia y formación para la inserción laboral de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones”.

Artículo 2°. *Población objeto.* Serán destinatarias de esta ley todas las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Artículo 3°. *Definición.* Entiéndase como Trastornos del Espectro Autista (TEA) al grupo de alteraciones del desarrollo en la persona, que presentan características crónicas y afectan de manera distinta a cada individuo. Se definen dentro de una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas basados en la tríada de Wing que incluye: alteraciones en la comunicación, flexibilidad e imaginación e interacción social.

Artículo 4°. *Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.* Se establecerá en Colombia el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, el cual se celebra el día dos (2) de abril de cada año, desarrollando acciones que promuevan su conocimiento, sensibilización y promulgación de derechos, para lo cual el

Ministerio de Salud coordinará con las demás entidades el desarrollo de esta actividad en el ámbito nacional, departamental y local.

El Ministerio de Salud presentará ese día los avances en la atención integral de la población con TEA, además de los estudios e investigaciones que promuevan nuevas tecnologías en salud para el diagnóstico temprano y su tratamiento efectivo.

Artículo 5°. *Campañas pedagógicas sobre concienciación del TEA.* Los Ministerios de Salud y Protección Social, de Educación y de Trabajo, las entidades territoriales y el Sistema Nacional de Discapacidad, diseñarán y realizarán conjuntamente las campañas pedagógicas de sensibilización y concienciación sobre la realidad que viven los pacientes con Trastornos del Espectro Autista, sus derechos y atención integral.

Parágrafo 1°. Se promoverá el buen uso del término autismo, generando procesos de sensibilización social que promuevan el respeto, entendiendo que las personas con TEA no se definen por su diagnóstico, sino por su dignidad humana.

Parágrafo 2°. Quien incurra en actos de discriminación o maltrato contra una persona o un grupo de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en la ley penal.

Artículo 6°. *Modifíquese el literal d) del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007.*

El literal d) del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007, quedará así:

“Artículo 10. El CND estará conformado por:

d) Representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, los cuales tendrán la siguiente composición:

(...)

– Un representante de organizaciones de padres de familia o cuidadores de personas con discapacidad cognitiva como síndrome de Down, trastorno del desarrollo intelectual, Trastorno del Espectro Autista y otras. La representación será alternada entre cada una de las discapacidades cognitivas.

(...)

Artículo 7° (nuevo). *Conformación de los Comités Departamentales, Distritales, Municipales y Locales de Discapacidad.* En la conformación de los Comités Departamentales, Distritales, y Municipales de Discapacidad, establecidos en el artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, el representante de las organizaciones de padres de familia o cuidadores de personas con discapacidad mental y/o cognitiva, como síndrome de Down, trastorno del desarrollo intelectual, Trastorno del Espectro Autista y otras, serán alternados cada uno de ellos, según el procedimiento que establezca el gobernador o el alcalde.

CAPÍTULO II

Protección integral en salud para la población con TEA

Artículo 8°. *Protección integral en salud.* En el marco del Sistema General de Seguridad Social y fundamentándose en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, se deberán garantizar los derechos en salud de la población con TEA, dando cumplimiento a los protocolos y guías de atención integral, para lo cual se deberá:

a) Garantizar la atención integral en salud a las personas con Trastornos del Espectro Autista a través de un equipo interdisciplinario que responda a la condición particular de salud, bajo el criterio, pertinencia y autonomía profesional;

b) Asegurar que los pacientes en condición de discapacidad sensorial, social, intelectual, mental, Trastornos del Espectro Autista y otras, junto con su familia, accedan a una orientación e información oportuna, clara, apropiada y suficiente por parte del profesional tratante, de manera que puedan participar activamente en los procesos de atención integral en salud y rehabilitación funcional, alcanzando la máxima autonomía posible.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social en un término de seis (6) meses formulará una guía de atención integral para las personas con Trastornos del Espectro Autista; esta guía estará basada en buenas prácticas y en el respeto por los derechos humanos.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social también garantizará que las familias y cuidadores de las personas con TEA reciban atención integral en salud, entendida como el apoyo interdisciplinario que deben recibir para comprender, aceptar, convivir e integrarse a la vida de un paciente con TEA.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá realizar la identificación y caracterización de la población con TEA, con miras a diseñar, formular e implementar una política pública articulada con las demás entidades correspondientes.

Parágrafo 4°. Las personas con TEA, sus familias o cuidadores tendrán prelación como beneficiarios de los diferentes programas sociales que establezca el Gobierno nacional, de acuerdo con el puntaje obtenido en la encuesta del Sisbén.

Artículo 9°. *Investigaciones en salud y estudios epidemiológicos.* Se deberán incorporar a las investigaciones en salud y estudios epidemiológicos los TEA, para conocer mejor sus causas, diagnóstico y tratamientos.

Artículo 10. *Prohibiciones* (nuevo). Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), incluidos los profesionales de la salud, se abstendrán de incurrir en acciones u omisiones que promuevan,

coloquen o hagan uso de barreras que obstaculicen la continuidad de los tratamientos médicos, afectando o negando los servicios en salud que requieran las personas con TEA, so pena de las sanciones en las que puedan incurrir por la no prestación de los servicios de salud.

CAPÍTULO III

Inclusión social de la población con TEA a través de las TIC

Artículo 11. *Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población con TEA.* El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dispondrá de las tecnologías y su soporte técnico para favorecer los procesos de inclusión social de la población con TEA, para lo cual contará con la asesoría, acompañamiento y financiamiento de los ministerios de Salud y Protección Social, Educación y Trabajo.

Dichas herramientas serán distribuidas de forma gratuita a nivel nacional sin ningún tipo de restricción para las personas con TEA, sus familias y las entidades públicas y privadas cuyo objeto social se oriente a la atención de esta población.

El Ministerio promoverá el acceso a la ciencia, tecnología e innovación de las personas con TEA, generando espacios de inclusión para que se desarrollen integralmente.

CAPÍTULO IV

Garantizar el acceso y desarrollo de una educación inclusiva de la población con TEA

Artículo 12. *Promoción de educación inclusiva para los pacientes con TEA en las instituciones educativas públicas y privadas.* Los pacientes diagnosticados con TEA tienen derecho a recibir una educación inclusiva, de calidad y acorde con sus creencias y cultura, por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional y sus entidades adscritas, garantizarán la formulación, implementación y desarrollo de planes, programas y proyectos necesarios para la construcción de modelos de enseñanza, teniendo en cuenta que su aprendizaje es diferente, para lo cual se potencializará el desarrollo de sus habilidades y talentos, haciendo las adaptaciones curriculares que se requieran.

Así mismo se generarán acciones interdisciplinarias que permitan la socialización y capacitación de la comunidad educativa en los protocolos y rutas de atención integral existentes, brindando herramientas que faciliten su integración al entorno escolar, con la participación de las familias y entidades correspondientes.

Artículo 13. *Garantizar el acceso a la educación superior de las personas con TEA.* El Ministerio de Educación garantizará el acceso a las instituciones de educación superior, mediante la flexibilización de los requisitos de admisión, incluida la adecuación de las diferentes pruebas de Estado.

CAPÍTULO V

Formación, promoción e inserción para el trabajo de las personas con TEA

Artículo 14. *Formación, promoción e inserción laboral de las personas con TEA.* El Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de aprendizaje (Sena) promoverán el acceso al trabajo de las personas con TEA, en igualdad de condiciones a las otras discapacidades, para lo cual será necesario que:

a) El Ministerio de trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Consejo Nacional de Discapacidad, desarrollen guías que brinden la orientación necesaria para la aplicación de las pruebas de ingreso laboral a las personas con discapacidad cognitiva, mental y social, garantizando que las empresas públicas o privadas, realicen un proceso de selección inclusivo;

b) El Ministerio de Trabajo, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) garanticen servicios y asesoría técnica a las empresas, promoviendo la accesibilidad laboral de la población con TEA, generando procesos de capacitación que permitan que tanto el empleador como los trabajadores en general conozcan la condición de los TEA, brindando el apoyo que desde salud ocupacional se requiera, para favorecer su inclusión laboral;

c) Se promueva el empleo con apoyo para las personas con TEA en igualdad de oportunidades;

d) Se realicen acciones conjuntas entre los empresarios, facilitadores y las personas con TEA, para garantizar el éxito de la inclusión laboral.

Artículo 15. *Promoción del empleo para las personas con TEA.* El Servicio Nacional de Enseñanza y Aprendizaje promoverá la participación efectiva y accesible de la población con TEA, para que puedan acceder a las distintas ofertas de acuerdo con sus bolsas de empleo.

De igual forma, el Sena garantizará la formación técnica y tecnológica de la población con TEA, para lo cual priorizará y flexibilizará los parámetros de ingreso.

CAPÍTULO VI

Fomento de las actividades recreativas y culturales de la población TEA

Artículo 16. *Fomento de actividades recreativas y culturales como parte del desarrollo integral y de inclusión social de la población con TEA (nuevo).* Se deberá incluir dentro de las políticas, programas, planes y guías de atención de las personas con TEA, la práctica de actividades recreativas y culturales como parte del desarrollo integral y de inclusión social.

CAPÍTULO VII

Permiso de circulación vehicular para familiares y cuidadores de personas con TEA

Artículo 17. *Permiso de circulación vehicular para familiares y cuidadores de personas con*

TEA (nuevo). Las Secretarías de Movilidad, Tránsito o quien haga sus veces otorgarán permisos especiales de circulación y parqueo, a los familiares y cuidadores de personas con TEA.

La situación de discapacidad debe ser claramente acreditada con la certificación médica correspondiente, expedida por el médico tratante perteneciente a su EPS. La excepción aplica únicamente para la inscripción de un vehículo por persona con discapacidad.

Parágrafo. Si el vehículo es requerido en vía por la autoridad de tránsito, deberá estar transportando a quien es beneficiario de la medida, o de lo contrario se procederá con la imposición de la orden de comparendo respectiva.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,



CARLOS EDUARDO ACOSTA L.
Coordinador ponente

FÁBER ALBERTO MUÑOZ C.
Ponente

CONTENIDO

Gaceta número 735 - jueves 20 de septiembre de 2018

CÁMARA DE REPRESENTANTES **Págs.**

PROYECTOS DE LEY

Proyecto de ley número 157 de 2018 cámara, por la cual deroga la Ley 22 de 1984 y expide la reglamentación del ejercicio de la Biología, de sus profesiones afines y de sus profesiones técnicas y tecnológicas, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 1

PONENCIAS

Informe de ponencia positiva para primer debate al proyecto de ley estatutaria número 091 de 2018 de cámara, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones. 22

Ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 046 de 2017 cámara, por medio de la cual se garantizan los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista y se modifican otras disposiciones. 30